

Rebelión popular y subversión social: el motín del Femeret de Lérida (1809)

Antoni Sánchez Carcelén

Universitat de Lleida

asanchez@historia.udl.cat



Recibido: octubre de 2014

Aceptado: junio de 2015

Resumen

En este estudio se intenta abordar un aspecto poco tratado por la historiografía, que ilustra sobre la conflictividad política y social del tiempo de la guerra de la Independencia. A partir del análisis de los antecedentes demográficos, económicos, sociales, políticos, religiosos e ideológicos, se examina el proceso juntero erigido a raíz de la invasión napoleónica y cómo la progresiva insatisfacción popular generada por las crecientes penurias materiales, el incesante reclutamiento y las considerables desigualdades fiscales, jurídicas y políticas asentadas en un contexto bélico extraordinario desembocaron en los tres primeros días del año 1809 en el conocido como motín del Femeret, la mayor revuelta del Principado durante la guerra del Francés.

Palabras clave: guerra de la Independencia; movimiento juntero; Lérida; motín del Femeret; violencia popular.

Resum. *Rebel·lió popular i subversió social: El motí del Femeret de Lleida (1809)*

En aquest article s'intenta estudiar un aspecte poc tractat per la historiografia, que il·lustra sobre la conflictivitat política i social del temps de la guerra de la Independència. A partir de l'anàlisi dels antecedents demogràfics, econòmics, socials, polítics, religiosos i ideològics, s'examina el procés juntista erigit arran de la invasió napoleònica i com la progressiva insatisfacció popular generada per les creixents penúries materials, l'incessant reclutament i les considerables desigualtats fiscals, jurídiques i polítiques assentades en un context bèl·lic extraordinari van desembocar, els tres primers dies de l'any 1809, en el conegut com a motí del Femeret, la major revolta del Principat durant la guerra del Francès.

Paraules clau: guerra de la Independència; juntisme; Lleida; motí del Femeret; violència popular.

Abstract. *Popular rebellion and social subversion: The mutiny of Femeret of Lleida (1809)*

This study attempts to address an aspect scarcely treated by the historiography, which illustrates the political and social conflicts at the time of the Spanish War of Independence. Through an analysis of the demographic, economic, social, political, religious and ideological background, we examine the assembly process that arose following the Napoleonic invasion. We also examine how growing public discontent due to increasing material hardship, relentless recruitment and considerable fiscal, legal and political inequality in an extraordinary context of war led to

what is known as the “mutiny of Femeret” in the first three days of the year 1809; the largest revolt of the Principality during the Spanish War of Independence.

Keywords: Spanish War of Independence; assembly movement; Lleida; Femeret mutiny; public violence.

Sumario

| | |
|---|---|
| Antecedentes demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales (siglo XVIII) | La gestación del motín del Femeret |
| La estructura socioeconómica de la ciudad de Lérida a principios del siglo XIX | Las consecuencias del motín: la formación de una nueva junta patriótica |
| Invasión napoleónica, insurrección popular y movimiento juntero | A modo de conclusión |
| | Referencias bibliográficas |

Antecedentes demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales (siglo XVIII)

Los estudios anteriores sobre el motín del Femeret de Lérida¹ se limitaban a hacer una exposición lineal de los hechos sin examinar sus causas y sin hacer una referencia clara a los movimientos populares que se desarrollaron a lo largo de la guerra del Francés en Cataluña. Por ello, en primer lugar, nuestra investigación considera ineludible abordar el estudio de los conflictos y de los movimientos sociales a partir de un análisis integral de los diversos factores históricos (Hobsbawm, 1991: 5-26; Haupt, 1986: 14-32).

La ciudad de Lérida experimentó un elevado crecimiento demográfico a lo largo del siglo XVIII. De los 2.262 habitantes, según la vecindad de 1718 (Bustelo, 1976: 81-91), pasó a los 10.714, de acuerdo con el censo de Floridablanca de 1787 (Iglesias, 1969-1970: 115-118). En buena medida, se debe a la extensión de la superficie cultivada, la intensificación de la agricultura, la diversificación de la distribución de los cultivos y el aumento de la producción. El incipiente desarrollo de las relaciones de producción capitalistas intensificó la concentración de la propiedad en manos de una ascendente burguesía agraria (Vidal, 1996: 237-264) y de los tradicionales estamentos feudales —Iglesia, nobleza y militares. Por contra, una elevada cantidad de propietarios con poca tierra —menos de nueve jornales— no llegaron a niveles óptimos de subsistencia y consolidaron la categoría de los propietarios asalariados. Asimismo, la posesión de dos o tres jornales revela una situación económica muy precaria y, además, aumentó el número de vecinos

1. Por ejemplo, Tarragó Pleyán (1947: 67-71); Gras (1899).

que únicamente disponían de su fuerza de trabajo. De hecho, en Lérida abundaban los campesinos con pocos medios —pequeños propietarios y jornaleros. De la misma forma, los crecientes ingresos procedentes de la tierra por la significativa alza de precios agrícolas no se repartieron uniformemente. Por último, cabe remarcar que, bajo el persistente régimen señorial, se incrementaron las entradas monetarias procedentes del diezmo y del arrendamiento de los derechos del patrimonio real (Vicedo i Rius, 1982: 57-90; 2007: 69-88).

En Cataluña, el desigual acceso a la tierra y a los ingresos, durante la segunda mitad del siglo XVIII, generó un aumento de la conflictividad señorial, por lo que se pueden hallar numerosas noticias que hacen referencia a conatos violentos y desórdenes públicos. Eso sí, sus motivaciones no van más allá de ser respuestas puntuales de un sector de la población ante actuaciones señoriales consideradas injustas u opresivas que conducen a expresiones momentáneas de cólera contra propietarios, recaudadores de impuestos o usureros (Arnabat, 1997; Cots i Castañé, 1983: 241-268; Tello, 1997: 89-104).² De la misma forma, fueron frecuentes los motines causados por la carestía de alimentos. El más famoso fue el *rebombori del pa* de Barcelona de marzo de 1789. De hecho, las sociedades del Antiguo Régimen vivían bajo el espectro del hambre debido a la alternancia de abundantes y escasas cosechas. Precisamente, la exigua recolección europea de 1788 provocó una ingente alza de precios durante los meses finales del año y los primeros —enero y febrero— del siguiente. La imposibilidad material de acceder a los productos más básicos motivó el asalto, destrozo e incendio de los establecimientos dedicados a la distribución del pan y de las casas de los arrendatarios —acusados de acaparadores—, de las jerarquías municipales —encargados de velar por el abasto de comestibles— y del capitán general —máxima autoridad—, incluso asaltaron la catedral después del vano intento de los canónigos de disuadir la multitud. A raíz de los diversos enfrentamientos entre la tropa armada con sables y el pueblo —según los textos, el «pueblo bajo» o «el populacho»— con piedras se efectuaron las primeras detenciones. El motín se dio por concluido con la publicación de los edictos que prohibían taxativamente nuevas asonadas y con la orden de expulsión de los extranjeros de la Ciudad Condal. En realidad, el orden público únicamente fue restaurado mediante una dura intervención represiva que conllevó el cautiverio de una cuarentena de individuos y el ahorcamiento de cinco hombres y una mujer, acusados de ser los promotores. La severa represión, a título de castigo ejemplar, pretendió evitar su repetición y su propagación; no obstante, se erradicó el problema político pero no el económico. Sin duda, los *rebomboris del pa* forman parte de un tipo de agitación social muy primitiva, asociada a reacciones instintivas e inevitables provocadas por un sistema de vida precario. De hecho, nos recuerdan a las clásicas revueltas que acompañan las periódicas crisis de subsistencias del Antiguo Régimen. A pesar de que las autoridades y los «ciudadanos honrados» de Barcelona se decantaron por la tesis del complot organizado —consideraron los *rebomboris del*

2. Del mismo modo, un porcentaje elevado de campesinos se negaron a pagar las cargas feudales y los censos, y cada vez era más frecuente y sistemática la defraudación: Vicedo i Rius (1993a: 99-112); Muñoz Dueñas (1994: 155-165).

pa como «una mancomunación de gentes viles» que arrastraron al «populacho» inculto por «misteriosas sugerencias de ignorado origen», parece evidente el carácter espontáneo y falto de preparación del movimiento popular, ya que los *rebomboris del pa* se extendieron por todo el Principado y solamente pretendían lograr unos objetivos a corto plazo —rebajar el precio del pan. De esta forma, no respondían a una ideología o doctrina preestablecida. La revuelta se dirigió contra los ricos y los poderosos, pero no en general, sino exclusivamente hacia unas personas e instituciones concretas; por lo tanto, no pretendía trastocar el orden social ni el sistema político vigente y aceptaba la jerarquía tradicional. En definitiva, las masas populares, movidas sencillamente por el hambre, no reclamaron cambios en la repartición de la propiedad ni en la estructura económico-social, simplemente utilizaron la acción directa como protesta (Castells, 1970: 51-81; Moreu-Rey, 1967).

Pocos meses después, en julio de 1789, estalló la Revolución Francesa. En 1792 cayó la monarquía en Francia y un año más tarde se alzó el fantasma de la democracia, con una subversión del orden social que resultaba desconocida en el Viejo Continente (Piqueras, 2014: 95). A pesar de la ignorancia política de la mayor parte de la población, resonaron entre los españoles los principios revolucionarios.³ Precisamente, con la finalidad de impedir que cualquier agente o mensaje de carácter subversivo pudiera penetrar en los dominios de la monarquía borbónica, se intensificó el control ideológico y la censura de las ideas reformistas (Aymes, 2005). Incluso, entre 1793 y 1795, para preservar el Antiguo Régimen, tuvo lugar una guerra entre la Francia revolucionaria y la España absolutista de Carlos IV (La Parra, 1994: 23-34). Una «guerra de opinión», sin duda, su principal elemento de innovación, por el cinismo con el que se deforma la verdad y por el carácter masivo y eficaz con que se llevó a cabo la «campana de desinformación», impulsada por el Gobierno y ejecutada por el clero mediante sermones, exhortaciones o cartas pastorales. La primera operación propagandística amplia de carácter ideológico en la historia de España pretendió suplir la insuficiencia de recursos humanos, logísticos y financieros, por un sinnúmero de discursos movilizadores encaminados a demostrar la validez de la causa defendida, o sea, la del Trono y el Altar, ya que, según su consideración, los revolucionarios galos anhelaban destruir la religión católica. Del mismo modo, se procuró erradicar el filosofismo de los revolucionarios ateos y regicidas, especialmente por el miedo a la «revolución social» y al democratismo. Así pues, la principal finalidad de la «guerra de opinión» fue la «antirrevolución». El «contagio revolucionario» se frenó por el recurso a las armas, a la religión y al patriotismo. Los clérigos pudieron dirigirse a la conciencia de los españoles en términos teológico-políticos. La movilización popular se asoció a la guerra santa, una especie de cruzada contra los impíos franceses. Con la paz, la Iglesia española regeneró su pretérito prestigio imponiendo la imagen de una institución imprescindible, enérgica y honorable (Domergue, 1989: 118-167; Aymes, 1991; 1994: 35-53; Roura i Aulinas, 1984: 57-65; 1988: 57-68).

En Cataluña, la *Guerra Gran* propició la resurrección del *somatén* y la creación de los tercios de *miqueletes*, o sea, la participación «del pueblo» en la con-

3. En España, los sucesos revolucionarios franceses produjeron cuantiosos tumultos populares: Anes (1969); Tasis (1962).

tienda bélica mediante el uso directo de las armas (Roura i Aulinas, 1990: 299-316; Fàbregas Roig, 2000a); inauguró el fenómeno del juntismo, ya que, con el objetivo de hacer frente a una situación inédita de emergencia a finales de diciembre de 1794, se erigieron unas Juntas de Promotores para defender «la Religión, la Patria y el Rey» y «procurar la reunión de la Provincia y su mutua defensa» (Ruiz, 1987: 27-43; Roura i Aulinas, 1993; Fàbregas Roig, 2000b); y, finalmente, los catalanes dieron fehacientes muestras de descontento popular respecto al «mal gobierno» de Godoy, al ejército real por sus malaventuras, al sorteo de quintos, al régimen de contribuciones o a la protección ilegal de que gozan algunos residentes franceses (Ossorio y Gallardo, 1977; Roura i Aulinas, 1989: 57-68; Aymes, 1990: 139-160). En definitiva, entre 1789 y 1808, a raíz del triunfo de la Revolución Francesa, el pueblo cobra un mayor protagonismo tanto en el discurso sociopolítico tradicional como en el proyecto tardoilustrado, en el que se agudiza la desconfianza y el temor a las clases populares (Fuentes, 2009: 1190).

La estructura socioeconómica de la ciudad de Lérida a principios del siglo XIX

A partir de la estadística profesional efectuada a los cabezas de familia durante el año 1802, podemos corroborar que la urbe ilerdense era un núcleo urbano orientado básicamente a la producción agraria (Vicedo i Rius, 1991).⁴ De hecho, el cultivo de la tierra ocupaba prácticamente al 45% de la población activa registrada, casi el doble de los leridanos dedicados a las diversas actividades artesanales desarrolladas en los múltiples talleres de la ciudad. Criados, comerciantes y profesionales liberales completaban los sectores productivos. Asimismo, por ser sede episcopal, Lérida albergaba a un destacado número de eclesiásticos. Por el contrario, pese a ser cabeza de corregimiento, era exiguo el porcentaje de militares y funcionarios. Por último, debemos destacar que el 2,23% de la nobleza latifundista disfrutaba de amplios privilegios sociales, jurídicos, económicos y políticos; por tanto, las prerrogativas no se correspondían en absoluto con la mayoría cuantitativa. Efectivamente, pese a suponer un escaso 5% de los cabezas de familia, la oligarquía local gobernaba y tomaba las decisiones más substanciales de la Paeria, nombre histórico del consistorio leridano. Además de los nobles, la élite social estaba integrada por los ciudadanos honrados —grandes propietarios rústicos—; los militares retirados de alta graduación; los altos funcionarios y regidores municipales —eran vitalicios o perpetuos y en algunos casos incluso conseguían una condición nobiliaria—;⁵ las dignidades religiosas —los canónigos y los obispos—; y, finalmente, los doctores en leyes y en medicina, que incluso llegaron a ser regidores por su amplia formación e instrucción y pasaron a alcanzar la condición de ciudadano honrado (Torras i Ribé, 1983: 242-249).

4. Una primera aproximación a la estructura socioprofesional sobre la base de la estadística profesional de 1802 en Casals (1999: 90-100).

5. Por ejemplo, los casos de Vicente Gallar y Juan Bautista Tàpies, ya que, gracias a Carlos IV, adquirieron la condición de caballeros siendo regidores del Ayuntamiento de Lérida: Lladonosa (1973: 630).

Tabla 1. La configuración de la estructura socioprofesional de Lérida (1802)

| Profesiones | Número | % |
|--|--------|-------|
| Agricultores (pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros) | 1.296 | 44,44 |
| Menestrales | 693 | 23,77 |
| Eclesiásticos | 354 | 12,14 |
| Criados-Otros | 272 | 9,33 |
| Comerciantes | 109 | 3,74 |
| Profesiones liberales | 77 | 2,64 |
| Nobleza-grandes propietarios y rentistas rústicos | 65 | 2,23 |
| Militares | 32 | 1,09 |
| Funcionarios | 18 | 0,62 |
| Total | 2.916 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir del Archivo Municipal de Lérida (en adelante AML), Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Tabla 2. La composición social de los privilegiados de Lérida (1802)

| Privilegiados | Número | % |
|---------------------------------|--------|------|
| Nobleza | 65 | 43 |
| Dignidades religiosas | 34 | 22,5 |
| Militares de alta graduación | 32 | 21,2 |
| Doctores en leyes y en medicina | 20 | 13,3 |
| Total | 151 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

A pesar de que la aristocracia leridana prácticamente desapareció después de la guerra de Sucesión de principios del siglo XVIII por su implicación austriacista (Albareda, 2010), de acuerdo con los datos de la tabla 2, los miembros que integraban la nobleza terrateniente superaban ampliamente a las dignidades religiosas, a los militares de alta graduación y, particularmente, a los doctores en leyes y en medicina. Eso sí, los Gomar, los Queraltó, los Ager, los Maraños y los Pallarés eran las únicas casas nobiliarias con una cierta relevancia en el Principado, a pesar de que su linaje era discreto, especialmente si se comparan con las propiedades y riquezas de los nobles del resto del territorio español (Casals, 1999: 92; Sánchez Carcelén, 2006; 2009).

Las profesiones liberales más numerosas fueron las de procurador, escribano, cirujano, abogado y médico —básicamente, miembros de la judicatura y facultativos. Los oficios con más prestigio se agrupaban en colegios profesionales. En Lérida, procuradores, boticarios, cirujanos, plateros, mercaderes de ropas, drogueros y escribanos constituyeron colegios profesionales sin que fuera necesario disponer de un número mínimo de colegiados. En dichas corporaciones, muy similares a los gremios en cuanto a organización, pero con una mayor consideración sociopolítica, los priores gestionaban las rígidas normas marcadas por los

estatutos de cada agrupación, que, obviamente, tenían que respetar todos los colegiados (Casals, 1999: 92). Así que, en realidad, eran asociaciones de trabajadores que podían estar formadas por lo que actualmente se entiende como profesiones liberales y menestrales, conocidas en el Antiguo Régimen como *artes y oficios*, ya que en dicho grupo se incluían las artes liberales —profesiones liberales— y las artes mecánicas —propias de algunas menestralías. En la Lérida de principios del siglo XIX, el colegio de notarios era el más importante y evolucionó, junto con el de los boticarios, cirujanos y procuradores, a lo que hoy en día se concibe como profesiones liberales; mientras que los tenderos de ropa, plateros y drogueros tuvieron una consideración menestral (Sánchez Carcelén, 2008: 211-226).

Tabla 3. La distribución laboral de los profesionales liberales de Lérida (1802)

| Profesionales liberales | Número | % |
|-------------------------|--------|------|
| Procurador | 14 | 18 |
| Escribano | 12 | 15,5 |
| Cirujano | 11 | 14,3 |
| Abogado | 10 | 13 |
| Médico | 10 | 13 |
| Maestro de educación | 8 | 10,4 |
| Farmacéutico | 7 | 9,1 |
| Veterinario | 3 | 3,9 |
| Arquitecto | 2 | 2,6 |
| Total | 77 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Tabla 4. La estructura socioprofesional de los no privilegiados de Lérida (1802)

| No privilegiados | Número | % |
|---|--------|------|
| Labradores propietarios, principalmente de pequeñas parcelas ⁵ | 604 | 37,1 |
| Maestros de gremio | 527 | 32,4 |
| Clero | 320 | 20 |
| Comerciantes | 104 | 6,4 |
| Colegiados | 63 | 3,9 |
| Funcionarios | 9 | 0,2 |
| Total | 1.626 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Los labriegos propietarios de medianas y pequeñas fincas y los maestros gremiales representaban casi un 70%, lo que confirma la preeminencia agraria y artesanal de las actividades económicas en una urbe con escasas transacciones

6. En concreto, 556 labradores propietarios, 38 arrendatarios y 10 pastores. Consultar tabla 6.

mercantiles y una burocracia prácticamente inexistente por la mínima presencia de funcionarios, pero con un elevado peso específico del sector eclesiástico, capaz de efectuar un significativo influjo ideológico y cultural, además de transmitir y mantener los valores intrínsecos de la sociedad tradicional al conjunto de la población leridana. Buena prueba de ello es la Cofradía de Labradores (Vicedo i Rius, 1999: 201-223), creada en 1395 y cuyo fin era el culto a Nuestra Señora de los Labradores. Durante el setecientos acabó siendo el principal instrumento que los cultivadores de Lérida tenían para defender las tierras comunales, dada la política privatizadora de los regidores del consistorio leridano. Asimismo, hemos de pensar que una cofradía nacida con una finalidad de tipo religioso permitía a la Iglesia, mediante una activa propaganda antirrevolucionaria y antifrancesa, alentar la cohesión social y el espíritu de lucha del campesinado, o sea, del sector social mayoritario.

Tabla 5. La distribución laboral de los asalariados de Lérida (1802)

| Asalariados | Número | % |
|------------------------|--------|------|
| Jornaleros campestres | 692 | 60,8 |
| Criados | 272 | 23,9 |
| Aprendices y oficiales | 175 | 15,3 |
| Total | 1.139 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Los braceros son mayoría por la predominante agricultura extensiva cerealística. Obviamente, los que no poseían parcelas de tierras que les permitieran actuar de manera autosuficiente tenían que ejercer de proletarios rústicos.

Tabla 6. Los agricultores de Lérida (1802)

| Condición profesional del sector agrario | Número | % |
|--|--------|------|
| Jornaleros | 659 | 50,9 |
| Labradores propietarios | 556 | 42,9 |
| Arrendatarios | 38 | 2,9 |
| Criados que trabajan para un propietario rústico | 33 | 2,5 |
| Pastores | 10 | 0,8 |
| Total | 1.296 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

El número de jornaleros representaba poco más del 50%. A su vez, si añadimos los sirvientes, supone el 23,7% de toda la población activa. Por tanto, casi una cuarta parte de los individuos que realizaban alguna tarea agrícola productiva vendían su fuerza de trabajo a cambio de un jornal o salario. Seguramente, el excedente de población no cualificada ni propietaria pasaba, automáticamente, a cultivar las nuevas tierras que se labraban en el marco de un crecimiento agrario

de carácter extensivo. Del mismo modo, se ha de tener presente que la población jornalera de la ciudad de Lérida era un colectivo que, además de dedicarse a las faenas del campo, también se podía convertir en un colectivo subalterno que en momentos concretos podía acometer las infraestructuras y obras públicas o bien, debido a una mala estación climatológica o un año de escasas cosechas, se tenía que dedicar a otras actividades, eso sí, que no impedían una situación material cercana a la pobreza crónica (Fontana, 1997: 3-11; Vicedo i Rius, 1993: 39-70).

Asimismo, los labradores propietarios —cerca de un 43%— constituían un numeroso grupo. Los que poseían únicamente unos escasos jornales —menos de nueve— padecieron la conocida como *fam de terra*, a no ser que protagonizaran una acertada política matrimonial que les ligara a las estirpes nobiliarias que disponían de vastas haciendas.⁷

De acuerdo con las cifras expuestas en la tabla 5, los trabajadores urbanos representaban en su conjunto casi un 40% de los asalariados leridanos. Como hemos comprobado, las profesiones agrupadas en gremios, las llamadas *artes mecánicas*, se situaban en una escala inmediatamente inferior a las profesiones liberales, las conocidas como artes liberales. En Lérida, durante el siglo XVIII (Huguet, 1990), hubo diez gremios constituidos: los maestros de casas, los herreiros, los carpinteros, los zapateros, los peleteros, los sastres, los *espardenyers* —alpargateros—, los tejedores, los guanteros y los alfareros, a los cuales se les ha de añadir, en 1794, el gremio de los cordoneros. Tal y como sucedía en los colegios profesionales, los maestros priores —se solían escoger cada año entre los maestros de cada agrupación— eran los individuos encargados de dirigir cada gremio, a partir de un jerarquizado organigrama, de arriba a bajo, compuesto por maestros, oficiales y aprendices. De la misma manera, los maestros artesanos que no disponían de gremio en su municipio se inscribían en gremios de otras localidades y formaban parte del padrón parroquial (Casals, 1999: 92).

Es importante destacar que, a principios del siglo XIX, los tenderos que vendían ropaje gozaban de un colegio profesional que, aun agrupando únicamente a seis individuos, les otorgaba una excelsa consideración entre los comerciantes y les confería un cierto prestigio representativo en el consistorio⁸ leridano que, de hecho, se remontaba al medievo. El resto de ocupaciones relacionadas con las actividades comerciales tuvieron una representación modesta en la estructura socioprofesional del XVIII. Solamente albergaban una notoria presencia los hosteleros —poseían fondas muy humildes—, los taberneros, los marchantes y el incipiente grupo de mercaderes de grano. Asimismo, se ha de tener presente que gran parte de los menestrales dedicados a la elaboración de diversos productos eran, al mismo tiempo, tenderos y comerciantes, mayormente, al detalle (Casals, 1999: 130-131).

7. Consideramos necesario distinguir los vocablos «agricultor y propietario» de «hacendado», ya que, a principios del siglo XIX, en las marcas gerundenses, el término hacendado substituye al de labrador en las escrituras notariales para diferenciar a los sujetos que administraban el patrimonio rústico de los que lo trabajaban directamente. Los hacendados, a pesar de no disponer de títulos nobiliarios, se erigieron en una clase propietaria acomodada que dominaba y dirigía la sociedad: Congost (1997: 51-72); Congost (1991: 54-61); Casals (2002: 166).

8. Lérida, AML, núm. 708, *Libro de elecciones de diputados del común i síndicos personeros*.

Tabla 7. Estructura laboral del sector comercial de Lérida (1802)

| Especialidad | Número | % |
|-----------------------|--------|------|
| Revendedor | 49 | 45 |
| Tabernero | 20 | 18,3 |
| Hostelero | 15 | 13,8 |
| Marchante | 7 | 6,4 |
| Comerciante | 6 | 5,5 |
| Tendero | 6 | 5,5 |
| Cafetero | 4 | 3,7 |
| Prestamista de dinero | 2 | 1,8 |
| Total | 109 | 100 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Las principales especialidades fueron las de los revendedores, los taberneros y los hosteleros. En líneas generales, los intercambios comerciales que acompañaban la producción artesanal tenían una incidencia básicamente local —urbana y comarcal—, dentro de una economía de autoconsumo, ya que el tráfico comercial interregional fue generado en su mayor parte por la producción agraria.

Tabla 8. La clasificación social en la Lérida del año 1802

| Categorías | Número | % |
|----------------------------------|--------|-------|
| Privilegiados | 151 | 5,14 |
| Pequeños y medianos propietarios | 1.626 | 55,8 |
| Asalariados | 1.139 | 39,06 |

Fuente: elaboración propia a partir de AML, Caja 1607, *Estadística profesional del año 1802*.

Así pues, una aguda diferenciación social generada por múltiples e históricas desigualdades económicas, políticas y culturales definía la sociedad leridana de principios del siglo XIX. El minoritario núcleo oligárquico privilegiado básicamente se dedicaba a la gestión de su patrimonio, o sea, a la percepción de las rentas agrícolas; a la acumulación de tierras; y a regir las instituciones locales, por lo que atesoraba un imponente poder e influencia. Por el contrario, la gran mayoría ejercía tareas eminentemente productivas e integraba colectivos socioprofesionales de diversa índole. Por ejemplo, en relación con los campesinos, hay que distinguir entre jornaleros, arrendatarios, medianos propietarios y grandes propietarios rurales —los que serán conocidos como hacendados o burguesía rural. Para que estuviera representado el sentir del resto de la sociedad, a través de una extracción popular anual entre los gremios, los colegios profesionales y las parroquias del municipio, de acuerdo con la reforma del *Auto Acordado* de 1766 (Rodríguez Casado, 1962: 147-161; Guillamón Álvarez, 1980: 187-198; Fernández Díaz, 1996; Casals, 2002), los leridanos pudieron escoger un síndico personero y cuatro diputados del común, hecho que permitió el acceso a la Paeria a individuos procedentes

de las profesiones liberales —especialmente los ricos sin privilegio, o sea, los doctores en medicina y los notarios—, de las actividades agrarias —labradores o propietarios rústicos—, del comercio y de la menestralía. Sin duda, dicha concepción, fruto del despotismo ilustrado, otorgó al pueblo una mayor representación política, pero, después de la expansión de los ideales revolucionarios,⁹ ¿sería suficiente? A pesar de la progresiva fragilidad del régimen borbónico, parece que sí, como hemos comprobado anteriormente en el apartado dedicado al análisis de la *Guerra Gran*. Pero, ¿ante unas circunstancias tremendamente excepcionales?, ¿ante el desplome de las instituciones gubernamentales?, ¿ante el vacío de poder derivado de las reales abdicaciones de Bayona?

Invasión napoleónica, insurrección popular y movimiento juntero

El estudio de la vertiente social de la guerra de la Independencia, de acuerdo con especialistas tan prestigiosos como Antonio Moliner (1982: 23-40; 1987: 629-678; 2001: 39-74; 2010a: 171-198) o Jean-René Aymes (1986; 2008), ha evidenciado, teniendo en cuenta la excepcionalidad del contexto, un severo enfrentamiento entre clases populares y clases propietarias. Precisamente, la magistral y monumental obra de Roland Fraser (2006) incide en lo que tuvo la guerra de conflicto de clases. Por ejemplo, según el general napoleónico Louis Caffarelli, «ésta es una guerra de pobres contra ricos», ya que, de manera simultánea, la guerrilla española combatió las tropas francesas y actuó contra los «ciudadanos [españoles] que disponen de fortunas». Del mismo modo, Fraser se esfuerza por insertar los movimientos populares en el universo mental de su época y asume las complejas combinaciones surgidas de «dos guerras» simultáneas, una contra los franceses —ocupación extranjera— y otra por las condiciones de vida —conflicto civil. De hecho, durante la contienda bélica, en numerosas localidades del Principado catalán se registraron importantes motines populares y diversos cargos públicos fueron asesinados. En buena medida, porque la insurrección antinapoleónica tuvo un cariz tanto de guerra popular como antiseñorial, o sea, de revuelta social contra el Antiguo Régimen.

Para las gentes de orden, el pueblo, en términos de «plebe» (Fuentes, 2009: 1192), era un monstruo al que temer por su carácter anárquico e irracional, que lo hacía imprevisible y propenso a la violencia, pero también a la sumisión y a la servidumbre. Así pues, ¿cuáles fueron las motivaciones de las juntas ante las revueltas patrióticas de 1808 y 1809? Sin duda, asegurar el control del orden público, impedir el desbarajuste emanado de un régimen popular, conservar los bienes y las propiedades de los súbditos pudientes y así lograr mantener el estatus social y el poder político de los sectores privilegiados, o sea, preservar el «gobierno de los ricos» (Moliner, 1984: 549-582; 1997; 2006: 37-70; 2007a: 51-83; Hocquellet, 2008; Ramisa, 2008b: 107-167; Dufour y Larriba, 2009; La Parra, 2010. De esta manera, se rompe el mito de una unidad fraguada en torno a la suma de esfuerzos de todas las clases y grupos en un ideal heroico y patriótico reforzado por los sen-

9. Un estudio sobre la elección de los cargos del Ayuntamiento de Lérida entre 1716 y 1808 en Casals (2002: 43-82).

timientos xenófobos que desde el principio acompañaban al conflicto (García Carcel, 2007; Moliner, 2007b; Cuenca Toribio, 2006; Esdaile, 2004; y Fuentes, 1992: 15-34). De hecho, la reacción juntista estuvo protagonizada por diferentes grupos sociales que ya estaban en el poder y que no pretendían la ruptura con lo anterior, como, por ejemplo, la nobleza, aún más si cabe por su condición de dirigente «natural» de la sociedad que ostentaba por medio de sus privilegios, riqueza, prestigio y cargos Alberola y Larriba, 2010; Ramisa, 1995; 2008a: 5-25). Tal y como afirmó el historiador Desdévise du Désert en su obra de 1910, eran conservadores «por instinto» y revolucionarios «por necesidad».

La siguiente cuestión por responder sería: ¿qué grado de espontaneidad o de premeditación hubo en la sublevación contra los franceses? En la ciudad de Lérida, a partir del año 1790, llegaron religiosos franceses huyendo de su propia Revolución. Su presencia impulsó la contrarrevolución eclesiástica dirigida por el obispo Jerónimo María de Torres (1784-1816)¹⁰ en forma de propaganda política antifrancesa a través de canales orales, visuales, simbólicos y emocionales. En aquel tiempo, el prestigio de los eclesiásticos era considerable y su influencia social, muy alta. El clero dirigía la espiritualidad de los catalanes. Además de los servicios religiosos, la Iglesia efectuaba destacadas prestaciones, como la beneficencia o la instrucción, y estaba presente en las fiestas y en todas las ceremonias y actos importantes de la vida individual y colectiva. A principios de 1808, la propaganda religioso-patriótica estuvo monopolizada por los sectores más reaccionarios del clero (La Parra, 2008: 273-284; Herrero, 1973; Martínez Albiach, 1969). Los sacerdotes, desde los pulpitos leridanos, adoctrinaron a los feligreses contra Napoleón, considerado el peor de todos los tiranos de la historia, una especie de Anticristo por ser un fiel seguidor de las ideas revolucionarias, hecho que intensificó aún más el ancestral odio para con los galos, «los agresores de siempre», un sentimiento natural surgido de los diferentes avatares históricos: disputas medievales de la Corona de Aragón con Francia y la larga conflictividad generada por la *guerra dels Segadors*, la de Sucesión o la *Guerra Gran* (Moliner, 2010b: 133-162; De Diego García, 2007: 131-161; 2008a: 209-254; Cahner, 1998; Rujúla y Canal, 2012; Sánchez Carcelén, 2007a: 279-290). La Iglesia utilizó un falso silogismo al identificar el combate contra los franceses con el combate contra la revolución. Pero su mensaje político fácilmente cuajó entre una población religiosa, aferrada a sus tradiciones y costumbres y mayoritariamente analfabeta, ya que, por ejemplo, únicamente la cuarta parte de los catalanes sabía leer (Arnabat, 2008: 26-42; Ramisa, 1995).

Bajo la notable influencia ideológica de los eclesiásticos, el 28 de mayo tuvo lugar una revuelta popular conocida con el nombre de *Sagrament dels lleidatans* —Sacramento de los leridanos. Los ilerdenses se juramentaron contra los franceses y se reconoció a Fernando VII¹¹ como el verdadero monarca de España. Del mismo modo, se enviaron emisarios a diversas urbes catalanas para extender la

10. Posteriormente, el obispo de Lérida redactó numerosos escritos en contra del liberalismo y las Cortes de Cádiz. Véase, por ejemplo: Torres *et al.*, 1812. Analizada en Sánchez Carcelén (2010: 133-139).

11. El papel movilizador de un rey inexistente en La Parra (2009: 199-209; 2007: 221-236).

insurrección por todo el Principado. Lérida tuvo el honor de ser la primera ciudad catalana en alzarse contra los napoleónicos. De acuerdo con el testimonio de las autoridades religiosas leridanas, fue espontáneo y popular: «Desde los primeros momentos en que por un impulso y voz general del pueblo determinó esta ciudad defender Nuestra Sagrada Religión, Rey y Patria del enemigo común que intentaba destruirlas».¹² Pero, en realidad, manifiestamente fue un levantamiento auspiciado, mediatizado y propiciado por las prédicas y arengas eclesiásticas antifrancesas.

A la sazón, las autoridades políticas de Barcelona solicitaron al obispo Torres que intentase calmar a la población. El prelado les contestó que estaba dispuesto a mantener «la paz y sosiego de este pueblo», o sea, a refrenar la agitación y exaltación populares. Ciertamente, la sedición antinapoleónica estuvo canalizada por los sectores más conservadores de la ciudad, ya que, durante el mismo día 28, para evitar el temido desgobierno, la oligarquía leridana —miembros de la Paeria (básicamente, nobles, ciudadanos honrados, oficiales del ejército, hacendados, altos funcionarios y doctores en leyes y en medicina) y dignidades eclesiásticas— organizó una Junta de Gobierno y Defensa, presidida por el obispo Torres. Los agentes de la feudalidad, especialmente la clerecía, fueron hábiles para canalizar las energías revolucionarias contra el francés. Así pues, no se trata en absoluto de una junta creada a instancia popular, ni sus componentes son elegidos por los tradicionales comisarios de parroquia ni por otro medio electivo. Se trata de una junta de notables que no representa el poder popular emanado del alzamiento. Eso sí, el protagonismo popular en el levantamiento antinapoleónico alteró sustancialmente el concepto de pueblo y se hizo acreedor a unos derechos políticos que hasta entonces se le habían negado (Fuentes, 2009: 1194). Sin duda, los nuevos gobernantes, desde las juntas, modificaron la manera de hacer política. Debido al nuevo equilibrio de fuerzas, las autoridades tuvieron que negociar, conceder contrapartidas y satisfacer reclamaciones o sugerencias. Tanto el contexto de ruptura del orden absolutista como la situación de movilización general debilitaron los principios de jerarquía y disciplina (Ramisa, 2013: 111); se propició, por ejemplo, una ampliación de la Junta a veintinueve individuos para dar más voz a miembros procedentes de los gremios, por ejemplo, Juan Mensa, comerciante de tejidos; Antonio Bordalba, alpargatero; y Miguel Meler, oficial de la construcción. Esta nueva entidad, constituida el 2 de junio, se convirtió en corregimental al representar a todo el corregimiento de Lérida.¹³ Su cometido no era otro que el de gestionar los recursos locales disponibles para fomentar el patriotismo y la resistencia antinapoleónica. El obispo Torres animó al pueblo leridano a participar en el movimiento, eso sí, considerando «la necesidad de rogar al Señor, e implorar su misericordia en las presentes circunstancias en que amenaza la ruina

12. Lérida, Archivo Capitular de Lérida (ACL), cartulario núm. 28, *Carta del 27 de septiembre del 1808*.

13. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Ilm. Fol. 3, 22 de junio de 1808; Lérida, AML, Caja 1.413, *Individuos que formaron parte de la primera Junta de gobierno en la invasión francesa 1808-1810*.

de la religión y de nuestra subsistencia».¹⁴ De hecho, la Junta no dudó ni un instante en recomendar la sumisa subordinación a las superioridades porque «la conmoción y el tumulto proclaman desde luego la anarquía y es bien infeliz la nación que se halla combatida por estas crisis revolucionarias. Apártense, pues de nuestra vista todos los espíritus turbulentos y audaces, que se valen de las ocurrencias difíciles y peligrosas para desplazar sus pasiones y cebarse en los asesinatos en la confusión y en la rapiña» (Carrera Pujal, 1957: 135).

Si bien en Lérida se pudo conservar la seguridad pública, en buena medida, como hemos comprobado, por la intermediación de la curia eclesiástica, en Tortosa (Tarragona) la formación de la Junta se produjo de forma violenta, ya que, al estallar la insurrección, el radicalismo patriótico popular contrastaba en exceso con la tibieza antinapoleónica de unos grupos dirigentes de la sociedad catalana que permanecían inmóviles ante los hechos y únicamente daban recomendaciones pacifistas. Las opulentas élites, al vincularse con los designios o preceptos josefinos o afrancesados, fueron acusadas de alta traición (Artola, 2008 [1953]; Juretschke, 1986 [1962]; Barbastro Gil, 1993; Riera, 1994; López Tabar, 2001; Morange, 2005: 27-54; Fuentes, 2007: 137-166; 2008: 119-136; Moliner, 2008: 27-64; Moreno Alonso, 2008: 485-506; Pro Ruiz, 2010: 205-232; Rújula, 2014: 13-153). Por su parte, los franceses, tanto los residentes como los prisioneros, y los sospechosos de afrancesamiento estuvieron en grave y constante peligro. Para remediar su indecorosa actuación, las autoridades municipales de Tortosa intentaron hacer alarde de su patriotismo constituyendo una Junta de Pacificación y Defensa el 29 de mayo y proclamando su oposición a Napoleón mediante un *Manifiesto*,¹⁵ pero los tortosinos no olvidaron que poco antes habían recomendado prestar obediencia a las órdenes del Capitán General y de la Audiencia y se habían negado a entregar armas al pueblo y a los somatenes.¹⁶ Bajo una supuesta unánime motivación patriótica, cabría añadir, por ejemplo, el malestar social generado por la pobreza material, la autocracia política, la desigualdad civil y el oportunismo o conveniencia personal, el 7 de junio se levantaron en armas y, tras asesinar al gobernador de la plaza —Santiago Guzmán de Villoria— y a su máximo asesor —un regidor—, disolvieron el Ayuntamiento y eligieron una nueva Junta. La facción radical estuvo dirigida por el secretario del ayuntamiento —Sebastián Caparrós—, un canónigo y diversos vocales de la nueva junta corregimental. Por lo tanto, nos equivocáramos si creyéramos que los autores eran exclusivamente personas procedentes del pueblo bajo. De hecho, cabe diferenciar a los líderes intelectuales —individuos con estudios y cierta posición social, conectados con la administración, judicatura y ejército— de los ejecutores materiales. El vacío de poder y la subsiguiente conmoción popular antifrancesa fueron utilizados contra los dirigentes locales para intentar subvertir el escenario socio-

14. ACL, Cartulario núm. 38, *Carta de Jerónimo María de Torres al Dean del Capítulo de la catedral*, 3 de junio de 1808.

15. Barcelona, Biblioteca de Cataluña (BC), Folletos Bonsoms, n° 3867, *Manifiesto de la Junta de Pacificación y defensa de Tortosa*, 31 de mayo de 1808.

16. No olvidemos que la misma propaganda oficial de la monarquía hispánica había contribuido a hacer del supuesto aliado un verdadero héroe: Larriba (2008: 239-276).

político (Vicens Vives, 1962: 278; Moliner, 1982: 24; Ramisa, 2008a: 20). Por ejemplo, en Ripoll, el armero Ventura Carbonell y el hacendado Barrera intentaron, sin éxito, controlar la junta de la población; el corregidor de Vic tuvo que renunciar a su cargo por los incesantes murmullos en contra suya procedentes de un numeroso sector popular que contaba con el apoyo de una destacada parte de las élites locales; y en Tarragona, una multitudinaria asonada dirigida por radicales agitadores como el escribano Ramon Fàbregas i Seguí obligó a substituir al gobernador (Ramisa, 2013: 98-99).

Más graves y violentos fueron los sucesos acaecidos en Vilafranca del Penedés (Barcelona), ya que, a las cinco menos cuarto de la tarde del 8 de junio, una multitud de gente armada dio muerte al gobernador —Juan de Tord—, a su mujer y al secretario del Ayuntamiento, y persiguió a otras muchas personas: «Tarde infeliz y noche espantosa [explica un testigo] pues que fue precisa toda la constancia de los naturales para sosegarlos algún tiempo. Todos los pregones que mandaban hacer era bajo pena de la vida. Tal fue el horror que causaron a sujetarse a su disposición» (Q.G., 1887: 140-141).¹⁷ Asimismo, en Olot (Gerona), por exceso de celo, el alcalde mayor fijó en la plaza Mayor a principios de junio unas proclamas del lugarteniente francés Murat. La revuelta popular fue instantánea. Centenares de segadores recorrieron la población y se concentraron ante la casa del alcalde vociferando: «¡Mueran los traidores!». El alcalde pudo refugiarse en el hospicio. Incluso, desde Vic, para velar por su integridad, se envió un considerable contingente de migueletes con la misión de protegerlo y trasladarlo a un paradero seguro; pero cuando era conducido por las afueras de Olot un gentío persiguió al alcalde y lo lapidó, o sea, lo mató a pedradas, ante la pasividad de los migueletes.¹⁸

En Fraga (Huesca), el 5 de junio fue asesinado frente al portal de su casa, en la calle de San Pedro, don Nicolás Catalán. Varios individuos le cosieron a puñaladas. El móvil declarado por los regidores a las autoridades fue su «tacha de traidor» que le atribuyó «la plebe». Además de notario, Catalán cumplía la doble función de secretario del Ayuntamiento y del pósito de granos. Sin duda, la persistencia del secretario del pósito en exigir la devolución de los adelantos de grano fue muy mal percibida por algunos labradores, después de tantos años de pésima coyuntura agrícola, que justificaban la no devolución de los créditos para las sucesivas siembras. Al tiempo que Catalán cayó acuchillado, numerosos particulares suplantaron la potestad del corregidor, Ayuntamiento y Junta de Gobierno y encarcelaron a los franceses residentes y a los avecindados en la ciudad. Luego saquearon sus casas. En el torbellino, tres hombres arrastraron a un «gabacho» desde el hospital de enfermos hasta la plaza y le prendieron fuego sobre una pira formada con los muebles de otro arrestado. Hacía más de cincuenta años que el francés Juan Fur residía en la población cuando «quedó hecho carbón en lo exterior». El 5 de agosto, los regidores se vieron obligados a pedir auxilio al gobernador de Lérida.

17. Barcelona, Biblioteca de la Universidad de Barcelona, *Resumen de lo acaecido en Villafranca del Penedés en los años de la Revolución contra los Franceses*, manuscrito n.º 481, f. 237.

18. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Caja 151, Olot, 23 de julio de 1808.

da —Zaragoza estaba ya sitiada por los franceses—, para que con su fuerza militar sofocara la revuelta popular. Del mismo modo, entendieron que sería necesario también reponer la figura del corregidor y advirtieron que, de no poder contar con un nuevo corregidor, sería preciso condescender a las exigencias de un pueblo que no confiaba en la junta actual y al que se le permitiría constituir una nueva junta a su antojo. «¡Cuán fatal sería esta situación!», exclamó el Ayuntamiento. El pueblo estaba decidido a participar en las decisiones públicas. El día 9, el gobernador de Lérida respondió al escrito de la junta comunicándole que tenía autorización del capitán general de Aragón «para velar sobre los movimientos de esta ciudad, que han sido hasta de ahora poco lisonjeros, por residir en ella algunos tumultuarios, que por siniestros fines se alimentan con fomentar la sedición y perturbar el buen orden, sacrificando las vidas de los franceses que se hallaban en las cárceles». Con ello y con el envío de alguna tropa, entendió que podía restituirse la cordura. Pero, ese mismo día, en sesión extraordinaria, regidores y notables acordaron ampliar la Junta de Gobierno. Entendieron que las circunstancias del momento exigían la participación del Estado llano. Convocaron a los priores y clavarios de todas las cofradías de oficios para que designaran a un individuo de cada una de ellas con el fin de «asistir a esta Junta a deliberar con los demás vocales que la componen, los asuntos de que se trate, en beneficio de la Religión, Rey y Patria, quienes sean autorizados con todas las facultades que competen a los actuales». Los móviles de la resistencia antinapoleónica fueron utilizados para calmar la sedición popular: «Dios, Patria y Rey», sin duda, resortes populares ligados al Antiguo Régimen. La revuelta finalizó con la entrada de diecinueve soldados, dos cabos y un capitán de la Compañía de Voluntarios de Cataluña y con el nombramiento, por parte del gobernador de Lérida —José Casimiro Lavalle—, del nuevo corregidor interino para el distrito de Fraga —Joaquín Castel, abogado de los Reales Consejos— (Berenguer Galindo, 2012: 18-22).

Del mismo modo, a principios de junio fue asesinado el gobernador militar de Huesca —Clavería— y en Valencia fue decapitado el barón de Albalat, odiado por el pueblo por haber ordenado disparar sobre las masas en un alboroto. Sincrónicamente, la muchedumbre asaltó la Ciudadela, donde se encontraban refugiados los franceses residentes (Delgado, 1979: 52). En Manresa (Barcelona), al poco de producirse el levantamiento antifrancés, el pueblo se quejó de que «los ricos dejaban las penas para los pobres» y hubo quién, en nombre de estos últimos, declaró al formarse una nueva junta local: «Mana lo poble baix» (Sarret y Arbós, 1922; Moliner, 2007c; Rubí Casals, 2009). Asimismo, el 3 de julio a las ocho de la tarde el revolucionario Antonio Giral, acompañado de una docena de hombres, mató al gobernador, a un francés y a dos civiles:

Unos vándidos que se hallaban con sus sables (que todo el mundo los lleva en las actuales circunstancias) empezaron a dar voces de que habían de matar a los que encontraran, se dirigieron a la cárcel, y sacando de ella a J. Moliner, alias Xunay, lo mataron, luego mataron a un francés, después entraron en la estancia común y mataron a J. Ferran (alias lo Gavaig)... Inmediatamente después pasaron a la casa del Sr. Gobernador, y sin que ninguno pudiese detenerlos, forzaron las puertas,

entraron en él, y por último quitaron la vida a dicho Señor y se disponían a quitarla a otros vecinos de esta ciudad a no haberse logrado atemorizarlos y dispersarlos con un fúnebre y numerosa procesión, que con un grande crucifijo, varias antorchas y sacerdotes, sabía y oportunamente se dispuso.¹⁹

Los desórdenes culminaron con la separación de la Junta de dos de sus miembros, J. A. Llisach y J. Bta. Vilaseca, regidores de la ciudad. El orden fue restablecido por el capitán Francisco Riera, quien dispuso rondas callejeras, encarceló a los culpables y constituyó una nueva Junta de Gobierno (Moliner, 1982: 34). Sin causar bajas, pero actuando de una forma notoriamente subversiva, en Gerona, el comerciante Joan Piserra junto a un grupo de campesinos, tras aprehender a los oficiales y autoridades, formaron una Junta de Gobierno popular destinada a combatir con dureza «la conmoción, el tumulto y la anarquía».²⁰ De hecho, cuando en junio de 1808 compareció por primera vez el general Duhesme ante los muros de la ciudad, se le presentaron dos emisarios de la plaza asediada que, según un informe francés, le confesaron que «el populacho hacía la ley». De la misma forma, la corregimental de Gerona, en un escrito fechado a finales de marzo de 1809, recordaba con orgullo la representación popular de las juntas después de «haber quitado del medio a los que tenían el mando» (Ramisa, 2013: 99). Por último, cabe resaltar que la Junta de Barcelona, ubicada en Martorell (Barcelona), proclamó estar dispuesta a acabar con «el gobierno de los ricos» a través del somatén (Moliner, 1982: 25). Precisamente, el alcalde de Martorell, ratificado por las nuevas autoridades que organizaban la resistencia antifrancesa, el 19 de julio de 1808 hizo saber al comandante general del Ejército las tremendas dificultades que tenía para imponerse a un pueblo que percibía la guerra como una refutación del orden social vigente: «Se me dio por respuesta que ahora no abía Bayle, ni Rey, ni Dios, y que todos somos iguales. Estas no esperadas palavras infunden al pueblo un orgullo sin freno y que no poniéndose un pronto y rígido remedio va a producir las más fatales y funestas consecuencias» (Moliner, 1989: 42).

Así pues, en el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, el pueblo (Vilar, 1982: 210-252; Aymes, 1989: 125-182; Fuentes, 1988: 176-209; 2010: 15-34) se erigió en el eje central de la guerra y de la revolución. Si con el triunfo de la Revolución Francesa irrumpió en la historia, durante la guerra de la Independencia²¹ se produce su descubrimiento como protagonista, con un hasta entonces insospechado acervo de virtudes —probidad, heroísmo, patriotismo... Aún más, mediante un acentuado carácter anárquico y revolucionario, intentó gestionar en su provecho la crisis del Antiguo Régimen y el derrumbe del Estado borbónico.

19. *Ibid.*, Caja 3, *Oficio sucesos de Manresa*, Manresa, 8 de julio de 1808.

20. Barcelona, BC, Folletos Bonsoms, nº 3872 y 3873, *Proclama de la Junta General de Gerona*.

21. El «vulgo desenfadado» se encarnizó con las autoridades establecidas, ya que, en los dos primeros años de la guerra antinapoleónica hubo, al menos, ochenta linchamientos a manos de multitudes populares enfurecidas. La mitad de ellos tuvieron lugar en las cuatro primeras semanas del conflicto. En casi todos los casos las víctimas no eran franceses, sino españoles acusados de colaborar con el enemigo. Al menos la mitad de ellos eran altas autoridades, militares o civiles: Cardesín (2008: 27).

De hecho, para muchos contemporáneos los sucesos vividos en 1808 fueron una verdadera revolución. Un testimonio anónimo de lo acaecido en Cataluña relataba así el carácter revolucionario de aquellos acontecimientos:

A primeros de junio [de 1808] prendió como una llama la revolución [...]; y todo el Principado en armas, los forajidos tomaron la ocasión más oportuna de vengarse so pretexto que los tales eran gavachos sospechosos y espías, llenándose los caminos de gentes armadas, ciudades amotinarse [sic] con las campanas de todos los pueblos que tocaban a rebato [...]. En casi todas las ciudades y villas de Cataluña se formaron desde luego Juntas de Gobierno a imitación de la que se había formado en Madrid cuando marchó Fernando. [...] En todas esas Juntas principales alarmaron al público con proclamas, exponiendo la conducta leal de nuestro gobierno para con la Francia y la felonía que había correspondido la conducta inaudita de Napoleón, y desde luego comenzaron las Juntas en pedir préstamos a los que tenían dinero y a los que no lo tenían, y nadie gozaba [por *osaba*] a resistirse, que si no le daban el título de traidor a la patria y de godoyísta [...]. Luego los predicadores en los púlpitos enardecían al pueblo [...]. La gente estaba tan dispuesta a la rebuelta que bastaba que uno solo dixese «fulano es gavacho», «es traidor»... para prenderle, mandarle saquear la casa y cometer los mayores martirios. En los diarios que se publicaban e imprimían en las ciudades [...] se escribía sin discernimiento. [...] En la mayor efervescencia salían de los pueblos la gente alborotado como una especie de frenesí, calentando los sesos con la lectura de dichos papeles y algunos eclesiásticos indiscretos en los púlpitos y el continuo toque de campanas a rebato parecían días de Juicio.²²

La situación es revolucionaria en tanto que las diversas juntas basaron su autoridad en la legitimación popular y suplantaron las instituciones borbónicas, o sea, la potestad legalmente establecida, y se inició así una revolución política que dinamitó el sistema absolutista y abrió las puertas a la soberanía nacional; sin embargo, los nuevos organismos de poder se mostraron contrarrevolucionarios porque controlaron la insurrección popular desde sus primeros compases y no fueron «populares» ni por su composición ni por sus planteamientos (Moliner, 1989: 109-110; Fontana, 1983: 14; Álvarez Junco, 2001: 142; Pérez Garzón, 2007: 100). Eso sí, bajo la bandera del patriotismo, se exteriorizó la oposición y el intento de revuelta del pueblo llano frente a la clase acomodada, ya que la riqueza y el dominio de unos pocos fue percibido ahora como un hecho profundamente injusto. Por lo tanto, junto al móvil de la traición, se percibieron síntomas claros de revuelta social.

La Junta corregimental de Lérida contribuyó decisivamente a la formación de la Junta Superior de Cataluña, instituida en Lérida el 18 de junio de 1808, bajo la presidencia del obispo de Lérida.²³ La Junta Suprema tuvo como principal objetivo

22. Barcelona, Archivo Histórico Ciudad de Barcelona (en adelante AHCB), Ms. B-57, *Revolución General de España y por lo que respecta a Cataluña, acahesida en junio de 1808*. Citado por Roura i Aulinas, 2008: 78.

23. «Como Lérida es una Plaza fuerte y la mas distante de las incursiones enemigas, se pensó reunir allí la Junta, para que con la tranquilidad que se necesita pudiese deliberar acerca de las medidas que debían tomarse en tan apuradas circunstancias»: Moliner (2010c: 125).

atender á la quietud y tranquilidad de todo el Principado y seguridad de sus habitantes en las turbulencias y agitaciones que experimenta, á causa de hallarse actualmente la provincia sin gefe y sin gobierno estable y seguro, por haber sido invadida de los franceses la capital Barcelona teniendo como en cautiverio á los gefes y tribunales encargados del régimen de todas las subalternas, abandonadas y reducidas por consiguiente en la mas deplorable é infeliz situación de una lastimosa anarquía, nombrando un comandante y capitán general del mismo Principado como medio único para poderse evitar y ocurrir á las funestas consecuencias que pueden temerse, y empiezan ya á manifestarse por la falta de esta cabeza.²⁴

Así que, la Junta Superior, evidenciando la mentalidad antirrevolucionaria de sus componentes, intentó preservar y garantizar el *statu quo* propio del Antiguo Régimen —poder político en manos de una junta de notables, percepción de las rentas, prestaciones, derechos señoriales y diezmo eclesiástico, protección de las propiedades y los bienes materiales y conservación del orden público— mediante la autoridad de un nuevo capitán general. De la misma forma, se declaró soberana y se atribuyó la administración de Justicia mediante la creación de nuevos tribunales de justicia.²⁵ De hecho, la Junta Suprema catalana no dudó en reprimir con severidad cualquier conato revolucionario popular. Más si cabe, «siendo tantos los desórdenes que se experimentan en los pueblos de este Principado con motivo de las actuales ocurrencias». Buena prueba de ello fue el documento enviado por la Junta de Balaguer (Lérida) a la Junta Superior el 12 de julio relatando un violento motín popular que atentó contra diversas personas y propiedades:

La Junta de Gobierno de la ciudad de Balaguer, pone en consideración de V.S. Ilmo. que al anochecer del Domingo último cometió el Pueblo baxo de esta ciudad el más cruel y bárbaro atentado: varios individuos —tres— fueron golpeados y echados al río, uno de ellos desapareció [...]. Esta Junta mira con dolor abandonada la seguridad pública sus vocales y la gente de bien están expuestas al furor del baxo Pueblo, que habiendo exparcido las amenazas más insultantes ha empezado a ejecutar sus sanguinarios y criminales proyectos. Espera que V.S. I. enviará inmediatamente alguna fuerza armada para contener e imponer respeto a los tumultuados y sostener la autoridad de la Junta, que por no tener fuerza armada es mirada con desprecio y no les impone ningún temor [...]. El vulgo desatado y frenético propaga que ahora no hay justicia, que han cesado los pagamentos y que en adelante ya no pagarán nada (si no tiene la Junta autoridad no les podrá obligar a pagar).²⁶

La Junta Superior del Principado, «para su remedio y restablecimiento de la tranquilidad pública» y con el fin de «zelar la quietud de sus vecinos evitando desorden, capturar y conducir presos a las cárceles de las cabezas de corregimien-

24. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Actas de la Junta Superior de Cataluña, vol. 1, fols. 1-3, *Colección de los principales decretos, órdenes, etc. que expidió en el año 1808 la Suprema Junta de Cataluña*. Núm. I. *Acta de la instalación en Lérida en Junio de 1808 de la Suprema Junta de Cataluña*, Lérida 18 de junio de 1808.

25. *Ibid.* Núm. 7. *Reglamento interino sobre la administración de Justicia*. Lérida, 22 de junio de 1808.

26. *Ibid.*, Caja 150, Balaguer, 12 de julio de 1808.

to, o partido, a los perturbadores de la quietud pública, ladrones, espías, y cualesquiera otros malhechores», exigió que en la capital de cada corregimiento o partido se formara una partida de quince soldados a caballo. Asimismo, ante la negativa popular a abonar los censos y las prestaciones señoriales, ordenó a las patrullas verificar el cobro de los impuestos y contribuciones establecidas «como también los alistamientos, sorteos, y demás conveniente al servicio de las armas, y provisión del ejército». ²⁷

En definitiva, es innegable el carácter de revuelta social que adquirió la guerra de la Independencia en Cataluña. Según un informe que la Junta corregimental del Vallés envió en junio de 1810 a la Junta Superior, parecía que en «los principios de nuestra gloriosa revolución la anarquía iba a entrar como una hidra de cien cabezas». ²⁸

La gestación del motín del Femerret

La Junta Superior de Cataluña, ante la amenaza del ejército francés sobre Lérida, el 4 de agosto se desplazó a la ciudad de Tarragona. ²⁹ La Junta de Defensa local leridana se vio obligada a organizar la defensa militar, ya que en cualquier momento las tropas napoleónicas se podían situar ante las puertas de la plaza fuerte ilerdense.

Desde un principio, las tareas defensivas de la ciudad —substantiales obras de fortificación— y la guerra —pertrechos, armamento, suministros, bagajes, alojamientos, movilización de los combatientes...— comportaron un elevado sacrificio humano y material en forma de reclutamientos y gravámenes ordinarios y extraordinarios. De hecho, frente a una imagen de idealismo simple, enmascarado por la entusiasta exaltación patriótica del momento, las gentes padecieron hambre ³⁰ y sintieron pavor, por ejemplo, a perder sus vidas, a las represalias, a las huidas forzosas, a las epidemias, a las requisas, a los saqueos, a las destrucciones o a sufrir sangrientas agresiones. El firme espíritu y la voluntad de «resistencia vital» del «pueblo en armas» (Cayuela; Gallego, 2008) no podían esconder por largo tiempo la cruda realidad de una mayoría de población campesina y buena parte del artesanado empobrecido, en buena medida porque toda actividad económica productiva y comercial se vio frenada. ³¹ Precisamente, el incremento de la

27. *Ibid.*, Actas de la Junta Superior de Cataluña, vol. 1, fols. 144-144v., *Colección de los principales decretos, órdenes, etc. que expidió en el año 1808 la Suprema Junta de Cataluña*. Núm. 12. *Providencias de la Junta para remediar algunos desórdenes que se cometían en Cataluña*, sesión 12 de julio de 1808.

28. *Ibid.*, Caja 14, *Informe de la Junta corregimental de Mataró a sus comisionados a la Junta Superior del Principado reunida en Congreso en Solsona*.

29. El arcediano Josep Espiga y, después, el abogado liberal Ramón Hostalrich representaron a Lérida en la Junta Superior de Cataluña. *Ibid.*, Actas de la Junta Superior de Cataluña, vol. 2, f. 4, Sesión del 7 de agosto de 1808; Casals (2002: 155).

30. Cabe recordar que, durante los veinte años anteriores a la guerra de la Independencia, más de la mitad de las cosechas de granos fueron escasas o nulas: Fontana (1978: 177-190).

31. Acerca de los costes económicos de la guerra consultar: Fontana y Garrabou (1986); Fontana (1981a: 209-217); Fontana (1981b: 7-20); Moliner (1983: 35-67).

miseria intensificó la inseguridad, la delincuencia y la inestabilidad social. La situación era propicia para el estallido de una revuelta social.

Con el propósito de costear la resistencia armada, la Junta Superior de Cataluña decretó un significativo aumento de la carga fiscal:³² doble catastro, producto de las salinas, producto de aduanas, papel sellado, casas diezmeras, subsidio que paga el estado eclesiástico, noveno decimal e incluso una capitación general como la del 1794, un impuesto progresivo sobre la base de diversas categorías —estado noble, comerciantes, hacendados, médicos y abogados, artistas con ejercicio, procuradores y escribanos, cirujanos y boticarios, artesanos con puerta abierta y, finalmente, jornaleros y criados. La Junta leridana designó a Manuel Fàbregues colector, a Juan Mensa cajero y a Pedro Jordà promotor fiscal. En un contexto de absoluta subsistencia material bajo un revolucionario trasfondo político-ideológico, los sectores populares se mostraron reticentes al abono de las viejas cargas señoriales feudales —diezmo— y al pago de los nuevos tributos. De hecho, las abundantes contribuciones —la conocida como «fiscalidad inmediata de guerra»— acrecentaron la desconfianza del pueblo hacia las autoridades, que disentían tanto en su uso como en su reparto, tanto en los pagos en metálico (dinero, oro y plata) como en las provisiones en especie (trigo, cebada, avena, aceite, paja...). Más si cabe, cuando, en buena medida, el conflicto se financió con los tributos, empréstitos y exacciones extraídas de los campesinos, mientras que algunos mercaderes y hacendados (Bosch Portell, 2009: 57-77) hicieron grandes negocios y consolidaron sus vastas fortunas. Así pues, la guerra no atenuó la progresiva diferenciación social que a lo largo del siglo XVIII mejoró el nivel de vida de unos pocos, especialmente los comerciantes y los labradores acomodados, y dificultó la de muchos otros —los consumidores sin excedentes que vender.

Para oponerse con garantías a la invasión napoleónica, la Junta Superior de Cataluña intentó formar un ejército de cuarenta mil hombres, o sea, buena parte de la población masculina productiva, a repartir entre los corregimientos catalanes a razón de siete veces los cupos asignados en el reparto de 1806: «se haga un alistamiento en todos los pueblos del Principado, de todos los vecinos en general de la edad de diez y seis años hasta los quarenta ambos cumplidos».³³ A últimos de junio se levantaron en Lérida tres tercios de migueletes (Moliner, 2010c: 90 y 257) y una compañía de artilleros urbanos, unas milicias honradas que en realidad eran cuerpos de vigilancia interna para asegurar el mantenimiento del orden social (Canales, 2003: 10-37). A pesar de que somatenes y migueletes eran instituciones de honda raigambre en la tradición e historia de Cataluña que cumplían funciones de defensa civil armada del territorio, reaparecieron «las otras caras de

32. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Actas Junta Superior de Cataluña, *Colección de los principales decretos, órdenes, etc. que expidió en el año 1808 la Suprema Junta de Cataluña*. Núm. 9. *Plan de las contribuciones y arbitrios para la manutencion del ejército de Cataluña*. Lérida, 26 de Junio de 1808.

33. *Ibid.*, *Colección de los principales decretos, órdenes, etc. que expidió en el año 1808 la Suprema Junta de Cataluña*, vol. 1, fols. 12-13, núm. 2. *Acuerdo para el pronto levantamiento de 40.000 hombres en Cataluña*, Lérida, 20 de junio de 1808.

la guerra», esta vez en forma de resistencia al encuadramiento armado —deserciones, entre un 20% y un 30%— y oposición popular al sistema de quintas —entre los procedimientos para eludir el servicio hallamos desde la simple huida hasta la mutilación del dedo índice de la mano derecha—, en buena medida porque comportaba prolongadas ausencias que impedían auxiliar en el trabajo a sus respectivas familias bajo unas durísimas condiciones de vida —férrea disciplina militar escasamente retribuida— (Canales, 1988: 271-300; 1990: 211-230; Sales, 1974; Ramisa, 2013: 99-101). Por ejemplo, la Junta de Cervera denunció que «muchos individuos de las divisiones de reserva del corregimiento de Lérida han abandonado sus puestos de operación, retirándose a sus casas y causando muy mal ejemplo en los pueblos de su tránsito». ³⁴ Así pues, no resulta extraño que uno de los muchos escritos anónimos que circularon atribuía todas las desgracias del Principado a la fuga de los quintos, a los desorbitados impuestos introducidos y a la falta de patriotismo entre los que ocupaban cargos públicos. ³⁵

De hecho, las tareas agrícolas de los meses del verano de 1808 obligaron a nuevas exhortaciones en favor de la defensa de la patria y a las primeras medidas punitivas contra una deserción que se fue generalizando a medida que sucumbía el primigenio ardor patriótico ante la continuidad del esfuerzo requerido, ante la desigualdad social generada por las exenciones de las gentes acomodadas de concurrir al reemplazo del ejército ³⁶ —mediante la posibilidad del rescate, con la que no contaban los pobres— o ante la incorporación de tercios de migueletes a los regimientos del ejército desde diciembre de 1808 ³⁷ por las ingentes y reiteradas exigencias en hombres con los que alimentar la máquina bélica, o sea, las próximas víctimas de una guerra precedida pocos años antes de una crisis agrícola y una crisis demográfica (1800-1805). Justamente, en Cataluña, 1809 fue con diferencia el año más catastrófico, ya que a las operaciones militares cabe adicionar la crónica subalimentación —deficientes cosechas provocaron el conocido como *any de la fam*— y las múltiples epidemias —tifus, disentería y *calenturas*— propagadas por los constantes movimientos de tropas y civiles. Asimismo, a pesar de que la intervención popular en la guerra la hizo más cruenta que un conflicto convencional, las víctimas mortales se dieron en mayor número entre la población civil que entre los combatientes, y 1809 fue un año en el que el conflicto bélico alcanzó una especial dureza tras la entrada de nuevas tropas napoleónicas en la Península en los últimos meses de 1808. ³⁸ Cabe recordar que Madrid capituló ante el propio Napoleón el 4 de diciembre de 1808 y desde el 20 de diciembre de 1808 hasta el 20 de febrero de 1809 se prolongó el asedio de Zaragoza (Lafoz Rabaza, 1996). Aspecto nada desdeñable para comprender el estado anímico de los leridanos, ya que la conquista de Zaragoza no solamente precipitó la caída

34. *Ibid.*, Caja 76, 18 de enero de 1810.

35. *Ibid.*, Caja 187, Manresa, 29 de julio de 1810.

36. Tal y como denunciaron los vecinos de Valls al capitán general. *Ibid.*, Caja 72, 29 de agosto de 1809.

37. *Ibid.*, vol. 21, fols. 106-107, 20 de diciembre de 1808.

38. Las mejores aproximaciones a los efectos demográficos de la guerra de la Independencia: Nadal (1976; 1990: 37-49); Pérez Moreda (1980); Canales (2002: 283-299; 2004: 37-54).

de Aragón en su conjunto, como así fue, ya que Jaca, Monzón y Fraga capitularon y Barbastro fue fácilmente ocupada, sino que Suchet vislumbró un nuevo objetivo: Lérida y el dominio de la línea del río Segre (Sánchez Carcelén, 2013a: 99-116).

Del mismo modo, las derrotas en los enfrentamientos de Llinars (16 de diciembre de 1808) y de Molins de Rei (21 de diciembre) alzaron las voces populares que acusaban de traición, cobardía y falta de patriotismo a los jefes militares. El denostado capitán general Vives fue obligado a dimitir para salvar la vida, pues la población de Tarragona le «trató de traidor» y «pidió con empeño» su cabeza. La desafección popular facilitó las grandes dispersiones que siguieron a los triunfos militares franceses del invierno de 1808-1809 (Cabanés, 1809; Canales, 2001: 955-987; Recasens, 1965: 153). Incluso constituyeron el caldo de cultivo de la conmoción que se produjo en Lérida en enero de 1809 (Canales, 2003: 17).

Nuevamente, el malestar popular se conjugó con la nota de traidores que podía imponerse sin demasiada dificultad a quienes acumulaban continuos fracasos en el campo de batalla. Dichas imputaciones recuerdan los primeros momentos del alzamiento antinapoleónico (mayo-junio de 1808), cuando las autoridades solicitaron calma y sujeción a la legalidad, lo que exasperó a una población sublevada que percibió en tal comportamiento la fidedigna prueba de la traición. Pero, a finales de 1808, la excesiva y prolongada carga impositiva, la desarticulación de las actividades económicas, las continuas sustracciones y pillajes, la militarización de la población mediante la imposición de unas quintas que solamente recaían en los sectores más deprimidos de la población, las crecientes diferencias sociales entre unos estamentos privilegiados y la mayor parte del Estado llano, el gobierno de los ricos en forma de junta de notables —eclesiásticos, nobles, propietarios y representantes de los gremios—, el oportunismo, el contrabando, el negocio de la guerra, el sufrimiento de los más necesitados, la carestía de cereales —la base de la alimentación de las clases populares, ya que obtenían el 70% de la energía a partir del pan y las harinas— (Torija Isasa, 2009: 613-638), el hambre y la elevada mortandad podían originar un movimiento popular incontrolado y radicalizado. Asimismo, el omnipresente aparato de propaganda no logró conservar la efervescencia patriótica. Sin duda, el avance de las tropas francesas y las exigencias de dinero y sangre erosionaron hasta el extremo la moral de la resistencia antinapoleónica. Del mismo modo, las autoridades leridanas incrementaron la represión para penar y escarmentar a los desertores y a los afrancesados, hasta tal punto que las prisiones de Lérida llegaron a su máxima ocupación.

Por último, como el motín del Femeret tuvo lugar en el mes de enero, debemos aducir que en dicho período las tareas agrícolas eran prácticamente nulas, ni tan solo se podaba o sarmentaba —en Lérida estas labores se llevaban a cabo en febrero—, ya que los momentos de máxima actividad eran tres: de febrero a abril, el mes de junio y los meses de octubre y noviembre (Vicedo i Rius, 2002: 101-131). La estacionalidad de las actividades agrarias nos permite definir los momentos del año en que la demanda de trabajo alcanza los niveles mínimos y máximos. En una urbe eminentemente agrícola como Lérida se traducía en falta de jornales para sustentar las unidades familiares y suponía disponer de cuantioso tiempo libre para, por ejemplo, participar en actos colectivos. De hecho, tradicionalmen-

te los gobernantes, en los meses en que no había labores de campo, impulsaban obras públicas para mantener ocupados a los jornaleros, otorgarles un complemento salarial y evitar alteraciones del orden público por inactividad y falta de caudales. Así pues, la coyuntura estacional fue favorable al estallido del motín del Femeret, más si cabe si agregamos el rigor del crudo invierno, ya que en la guerra de la Independencia la mortandad derivada de las enfermedades por falta de abrigo o por escasa alimentación —los productos de huerta eran estacionales— fue aún mayor que la producida por los mismos combates (Cantera Montenegro, 2010: 147-165). Finalmente, cabe apuntar que el motín del Femeret no fue una crisis de subsistencia —una revuelta del pan— típica del Antiguo Régimen —sin trasfondo ideológico ni intención de alterar el orden social. Si bien es cierto que la guerra y la presencia de soldados interfirieron de manera grave en el abastecimiento de la ciudad, los precios mensuales del trigo en el almudí de Lérida (pesetas/fanega) demuestran que fue a partir de 1811 cuando se inició un ascenso espectacular. Por ejemplo, en julio de 1808 cotizaban a 124,20, en diciembre descendieron a 115 y en enero de 1809 a 101,80 (Vicedo i Rius, 2008: 41-79; 1983: 167-176).

El motín del Femeret

La revuelta popular más significativa dentro del ámbito catalán durante la guerra de la Independencia tuvo lugar en la ciudad de Lérida a lo largo de los tres primeros días del mes de enero del año 1809.³⁹ En mayo de 1808, ante el desplome de las instituciones borbónicas y la amenaza napoleónica, el pueblo leridano se había movilizado con presteza y había contribuido a la patriótica resistencia aportando víveres, numerario y combatientes. Méritos más que suficientes para legitimar su plena intervención política. Más si cabe cuando el movimiento juntero no permitió expresar con libertad las inquietudes populares ni atenuar el creciente malestar popular causado por el desfavorable curso de la guerra. Como hemos apreciado, en Cataluña, la presión popular ya se había manifestado de diversas maneras: oponiéndose a las quintas, a las cargas tributarias, a las rentas señoriales, criticando a los jefes militares u organizando asonadas conducidas por agitadores radicales. A finales de 1808, la junta leridana, no ajena a un posible movimiento revolucionario, redobló la vigilancia, pero no logró impedir su estallido. El detonante del motín se debe a la propagación de un rumor que revelaba que la ciudad iba a ser víctima de una «traición», o sea, iba a ser conferida a las fuerzas napoleónicas. El pánico colectivo se transformó en ira popular a medida que se difundió el supuesto plan para apoderarse de Lérida sin necesidad de asaltar sus murallas. La estrategia era bien simple: desde el castillo principal —Seu Vella— tomarían el adyacente polvorín de la Suda y rendirían la plaza fuerte. Un golpe desde dentro. ¿Quiénes lo protagonizarían? ¿Recibirían ayuda del interior? Rápidamente, el sentir popular sospechó de unos prisioneros franceses que iban a

39. Si no se expresa lo contrario, el apartado se fundamenta en la siguiente fuente: Madrid, Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, legajo 31 (2), fols. 131-139.

ser conducidos hasta el castillo principal, aparentemente para encarcelarlos; pero en realidad consideraron que estarían confinados con el objetivo de librar Lérida a Napoleón. Asimismo, en dicho presidio se hallaban privados de su libertad por orden de la Junta de Defensa notables personalidades de la ciudad, detenidos, parece ser, por su escaso fervor patriótico. Sin juicio de por medio, todos fueron hallados culpables de infidencia. La traición comportaba la sentencia de muerte. Una profusa y enfurecida multitud se dirigió al castillo principal para ejecutar su propio veredicto. Merced a la resuelta oposición de unos pocos oficiales del ejército, algunos alcaldes de barrio y varios vecinos «en nombre del sagrado derecho de la guerra», los sublevados no consiguieron matar a todos los reclusos. Eso sí, no pudieron impedir el asesinato de algunos de los reos acusados de colaborar con los franceses, como fue el caso de Manuel Epifanio Fortuny Van-Oosterom (Cerro Nargánez, 2007: 255-283; Lladonosa, 1973: 674; Moliner, 1989: 49), oidor de la Audiencia de Barcelona; Melchora Van-Oosterom, su esposa; Carlos, su hijo de apenas dieciséis años; J. Rúbies y J. Casals, dos abogados de Balaguer (Lérida); y, finalmente, el noble Teodoro de Santgenís y el colector del catastro José Ignacio Bayona (Casals, 2011: 22). ¿Ricos y poderosos acusados de afrancesamiento? ¿Pretexto para deshacerse violentamente de los ávidos codiciosos? ¿Revelación de arraigados odios y rencores, avivados por la escasez general frente a la opulencia y el dominio de una minoría? ¿Afrancesados convencidos debido a su elevada instrucción académica y superior condición socioprofesional? Los Santgenís eran señores de Blancafort, población situada en Aragón, y estaban emparentados con los Pocurull, notarios, y los Bayona,⁴⁰ ciudadanos honrados de Lérida. Resulta sospechoso que en el furibundo asalto muriera un miembro de los Bayona y otro de los Santgenís, emparentados entre ellos, hecho que nos hace pensar en un posicionamiento familiar cercano a las posturas afrancesadas (Casals, 2002: 157). José Ignacio Bayona fue cosido a cuchillazos y su cadáver fue arrastrado a lo largo y ancho de buena parte de la ciudad, en concreto, desde el almudín hasta su ostentosa morada, donde le depusieron encima del lecho de su esposa, que se hallaba enferma. Dada su preeminente condición social, su impopular profesión y el atroz ensañamiento al que fue sometido, a la imputación de traición cabe añadirse un considerable componente subversivo socioeconómico.⁴¹

Del mismo modo, Manuel Epifanio Fortuny nació en el seno de una familia de destacados notarios. Su abuelo, Francisco Fortuny, por su fidelidad a Felipe V obtuvo una regiduría que ejerció entre 1722 y 1750, complementada desde 1740 con la compra a la monarquía del cargo de secretario vitalicio del Ayuntamiento de Balaguer (Lérida). En 1753, en recompensa a sus servicios, se le concedió el título de ciudadano honrado de Barcelona (Cerro Nargánez, 2001: 45-46). Su padre, Epifanio Fortuny, nació en Balaguer en 1724 y estudió filosofía y leyes en

40. Cristóbal Mestre, heredero de la casa Bayona, ciudadano honrado de Barcelona, doctor en leyes y abogado, formó parte de la junta napoleónica (1810-1814), fue síndico personero en 1818, segundo alcalde constitucional del Ayuntamiento de 1821 y regidor del consistorio absolutista de 1825 a 1832. Lérida, AML, Actas del Ayuntamiento de Lérida, 1818, fols. 22-23; 1821, fol. 4; Sánchez Carcelén (2009).

41. Lérida, Archivo Histórico de Lérida (AHL), Protocolos notariales núms. 181, 461 y 973.

Cervera, donde se graduó como doctor en cánones en 1743. Fernando VI le nombró alcalde mayor de Vilafranca del Penedés conforme al real decreto expedido el 26 de julio de 1752.⁴² Pese a ser una plaza destinada a letrados que comenzaban la judicatura al servicio del rey, los alcaldes mayores o tenientes de corregidor desempeñaron un significativo papel político y judicial en Cataluña durante el siglo XVIII.⁴³ En 1757 Fortuny fue prorrogado en la alcaldía, pero no concluyó su mandato porque el monarca le designó alcalde mayor de Lérida. Después de finalizar su mandato pasó por las alcaldías de Montblanc (1761), Tárrega (1770), corregimiento letrado de Villena (1775), Puerto de Santa María (1779) y Alicante (1783). En 1785 fue nombrado alcalde del crimen de la Audiencia del Principado y en 1791 oidor en el mismo tribunal, empleo que todavía ejercía cuando falleció (1797) (Cerro Nargánez, 2007: 263-265; Molas Ribalta, 1980: 155). Un hijo suyo, Manuel Epifanio Fortuny, también fue nombrado alcalde del crimen (1793) y oidor (1797) en Cataluña, pero, dado su violento asesinato, no pudo emular la dilatada carrera de servicio de su progenitor.⁴⁴ De nuevo, se corrobora el elemento subversivo, o sea, el enfrentamiento social entre quienes se mantenían en la raya de la mera subsistencia económica y unos ciudadanos notables o pudientes que en calidad de autoridades del Antiguo Régimen pretendían seguir controlando los poderes fácticos. La nota de traidores ocultó el malestar derivado de la progresiva diferenciación social y material, acrecentado sobre manera por el desgaste acumulado durante los primeros meses de contienda. Asimismo, el hecho de hostigar a jurisconsultos podría relacionarse con el propósito de destruir documentos comprometedores como, por ejemplo, registros impositivos e hipotecarios que recordaban y consolidaban añejas y abundantes deudas.⁴⁵

Hasta aquí, el relato no diverge en demasía de otros conatos violentos vividos en el Principado —Tortosa, Vilafranca del Penedés o Balaguer— o en el lindante Aragón —Fraga— durante la primavera y el verano de 1808, ya que únicamente se trataba de ataques dirigidos a las autoridades y a las acaudaladas dignidades que habían evidenciado una actitud pasiva ante la invasión francesa o bien se

42. El despacho se le rubricó el 10 de agosto y el juramento se efectuó, ante el Consejo de Castilla, el día 22 del mismo mes. Barcelona, ACA, *Real Audiencia*, reg. 495, fols. 258-261v. Buen Retiro, 10 de agosto de 1752.

43. Entre sus responsabilidades, destacamos la de asesorar en materia de justicia ordinaria civil y criminal de primera instancia a los corregidores de capa y espada y militares del distrito; así como presidir el Ayuntamiento de regidores durante las frecuentes ausencias de sus superiores inmediatos: Cerro Nargánez (2001: 37-72).

44. En la primera mitad del siglo XIX, los Fortuny accedieron a la dignidad nobiliaria al heredar, mediante matrimonio con los Sanromà, la baronía de Esponellà. Dicho título fue concedido en 1707 a Gaspar de Berart y de Cortiada por el archiduque Carlos: Lladonosa, 1973: 629, 673-674.

45. En palabras de Antoni de Bofarull: «En Lérida es donde más fatalmente se hicieron sentir las consecuencias del descalabro de Molins de Rey y de la marcha del francés sobre Tarragona [...] [el motín del Femeret] manchó el buen nombre de Cataluña, en situación tan triste (el día 1º de enero de 1809), una conmoción infame, ocurrida en Lérida, de carácter parecido al que desconcepcionó a la ciudad de Valencia, cuando su desmandada plebe asesinó a los extranjeros que se encerraban en uno de sus principales fuertes [...] solo fue culpable el *vecindario* que *vociferando palabras de muerte* contra varios prisioneros franceses que fueron conducidos al castillo, forzó las puertas de éste y los asesinó»: Bofarull (1886: 278-279).

habían manifestado partidarias o cuando menos proclives al bando napoleónico. Eso sí, tales actos supusieron el fin del respeto a un orden jerárquico basado en el privilegio de la sangre. De la misma manera, pretendieron influir en el movimiento juntero y después de promover acciones violentas que se saldaron con algún homicidio participaron activamente de la elección de una nueva junta.

Así pues, ¿qué hay de extraordinario en el motín del Femeret? El mismo 1 de enero de 1809, tras negarse a ejecutar a los prisioneros franceses encarcelados en la Seu Vella, los asaltantes acusaron a diversos miembros de la Junta de Gobierno local de consentir aquella conspiración y fueron inmediatamente tachados de traidores a la patria. A la sazón, el tumulto contó con una mayor intervención de las capas sociales más humildes, las cuales no dudaron en enfrentarse abiertamente a la élite dirigente y a la Junta de Defensa leridana. El instintivo asalto derivaría en un movimiento revolucionario radical. El oficial del ejército en grado de capitán de artillería Ramón Gómez se erigió en el promotor principal de la rebelión y movilizó a buena parte de la población leridana mediante unas arengas «patrióticas» destinadas a acrecentar la irritación popular para con una traidora junta, acusada de tener mal defendida la plaza fuerte ante el inminente ataque de las tropas francesas. Las alocuciones surgieron efecto y los leridanos más radicalizados tomaron el castillo principal y se hicieron con un importante botín: quinientos fusiles (Casals, 2002: 156-157). El pueblo en armas, esta vez, no para combatir al invasor napoleónico, sino para trastocar el orden social, la estructura económica y la organización política. En primer lugar, se apoderaron del almuñé y de las carnicerías —tanto la municipal como la eclesiástica, tal y como se había obrado durante los *rebomboris del pa*. El hambre alimentaba la revuelta. Eso sí, en este momento, el control de los principales acopios de grano y carne presuponía la firme voluntad de dilatar e institucionalizar el levantamiento. Por aclamación popular, Ramón Gómez fue ascendido a segundo comandante de artillería de Lérida y fue nombrado juez de las causas llamadas «de traición». Acto seguido, se erigió una comisión revolucionaria radical presidida por el verdugo de la ciudad. El pregonero de la Paeria ocupó el cargo de secretario. El pueblo se había alzado con el poder. La comisión modificó la composición de la Junta de Defensa introduciendo nuevos vocales afines al proceso insurgente. Asimismo, manifestó su inequívoca intención de efectuar un reparto de los bienes de los vecinos más pudientes entre los protagonistas de la insurrección. Las haciendas y los caudales de los ricos se requisarían y se donarían a los sectores más necesitados. Se había dinamitado el sacrosanto respeto a la propiedad en aras de imponer una especie de justicia social. Además, los amotinados amenazaron con reemplazar al gobernador —José Casimiro de Lavalle—⁴⁶ y al obispo —Jerónimo María de Torres— por considerar que habían «vendido» la ciudad a los franceses. Una vez cuestionadas las máximas instancias del poder local, Ramón Gómez se apoderó de las valijas de la correspondencia pública, pregonó su contenido y pretendió hacerse con algunos cañones «ya para asestarlos contra el lugar en que residía la

46. Véase el perfil sociológico y profesional de los corregidores militares de Lérida en Gay Escoda (1997: 593-606).

Junta [legítima] y contra el cuartel en que se hallaba el regimiento de Granada, ya para dispersar en las calles con la metralla a los buenos ciudadanos que auxilian al Gobierno, habiéndose formado el plan de asesinar indistintamente todas las autoridades y personas acomodadas, y llegando al extremo delirio de tener elegido un nuevo Rey». La subversión parecía no tener fin. Mediante el uso de la violencia —eliminación física de los oponentes: oligarquía y ejército— trataban de imponer un nuevo régimen e incluso pensaron en coronar a un nuevo soberano. Así pues, rechazando la monarquía borbónica —Fernando VII— rompieron con el pasado de una manera abrupta. Precisamente, a raíz del vehemente extremismo popular, el obispo Torres consideró oportuno sacar a la calle el Santísimo de la iglesia de San Juan para intentar calmar el movimiento revolucionario. La suprema autoridad eclesiástica y civil se valió de los símbolos religiosos cristianos para intentar restituir el orden tradicional y regenerar la cohesión social. Sin éxito, sin duda, ya que los sublevados atacaron y saquearon la residencia del doctor en medicina Jaime Nadal Monje, situada en la calle Mayor. Nadal, merced a un previo aviso, se pudo escapar por la cuesta del Jan y refugiarse en otra casa, en concreto, en el interior del horno de unos amigos pasteleros que vivían en el Canyeret. Una vez pasados los primeros instantes de peligro, consiguió huir campo a través por la huerta con dirección a Tarragona, ciudad en la que falleció el 13 de mayo de 1809 (Ortoneda i Mayoral, 1999: 6). Ante la magnitud de tales acaecimientos, la antigua Junta de Lérida se vio obligada a armar a «todos los ciudadanos honrados», organizar rondas de día y de noche, establecer un tribunal criminal y solicitar al capitán general de Cataluña el envío de una numerosa fuerza armada. Asimismo, la Junta Superior de Cataluña apoyó cuantas resoluciones había tomado la Junta leridana y remitió, de acuerdo con el capitán general Redding, un regimiento de soldados para restablecer el orden público en la ciudad. De hecho, los amotinados solamente cedieron ante la intervención de trescientos soldados del ejército de Granada: «Tres días duró la anarquía, presidiendo siempre Gómez todos los actos de desenfreno a que la plebe se entregó». Por lo tanto, la cuestión precedente parece resuelta: los insurgentes fueron capaces de apoderarse de Lérida durante los tres primeros días del mes de enero. Únicamente la fuerza armada exterior frustró unas aspiraciones destinadas a revertir el *statu quo*, no ya el propio del Antiguo Régimen, sino también el instituido mediante el movimiento juntero, porque en esencia preservaba de similar modo el control del poder político y el acceso a los bienes a la oligarquía local. Ciertamente, el proceso revolucionario popular se vio favorecido por la descomposición de las instituciones borbónicas, por el severo contexto bélico y por la difusión del ideario liberal defensor de un nuevo régimen político representativo de poderes limitados y repartidos, de la igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos, de un nuevo orden social con la supresión de los estamentos y del desarrollo de la libertad económica (Duverger, 1980: 196-202; Artola, 1990: 11-13).

El motín del Femenet fue reprimido duramente. De la misma manera que observamos en el caso de los *rebomboris del pa*, se pretendió dar ejemplo mediante la pública aplicación de un implacable castigo con la intención de evitar su propagación y repetición. En primer lugar, se detuvo a los principales respon-

sables. Los inculpados fueron encarcelados en un templo ubicado en el margen izquierdo del río Segre —llamado Cappellet—, precisamente donde se hallaban unos *femers* —estercoleros—, motivo por el cual el motín fue conocido con dicho sobrenombre. El 4 de enero, tras la escenificación de un sucinto proceso judicial, los causantes y dirigentes de la asonada, a excepción del verdugo del consistorio, que había logrado escapar, fueron ejecutados públicamente en la plaza de San Juan para brindar un escarmiento ejemplar a las masas sublevadas y disuadir a todo aquel que pretendiera iniciar un nuevo movimiento subversivo. Así que, una vez consumado el motín, en el breve plazo de cuarenta y ocho horas, siete individuos fueron hallados culpables y fueron irremisiblemente ajusticiados. Ramón Gómez fue considerado el principal inductor de la insurrección de acuerdo con la «sentencia de muerte contra Ramón Gómez, acusado de haber promovido la sedición ocurrida en Lérida».⁴⁷ El Tribunal de la Audiencia de Guerra del Ejército y Principado de Cataluña, de acuerdo con las atrocidades que cometió, «le declaró indigno del fuero, insignias y uniforme a que tenía derecho» por haber estado admitido «desde los primeros movimientos de la Nación en el Real Cuerpo de Artillería». Gómez fue «condenado Reo de alta traición», públicamente degradado y ahorcado, tras imponérsele la pena ordinaria de horca, y su cadáver, a tenor de la sentencia, fue decapitado y descuartizado, «colgándose la cabeza en la ciudad de Lérida, y los cuartos en las de Balaguer, Cervera, Tortosa y Gerona, en las plazas principales, de aquellas poblaciones, en donde se exhibió también, impresa la sentencia para execración de los amantes del orden, y para terror y escarmiento de los malvados». De la manera más explícita, atroz y sanguinaria fueron aplacados «los desmanes de la plebe [...] ignorante y entusiasta a la vez».⁴⁸ Días más tarde, el verdugo de la Paeria fue apresado cerca del puerto de la Panadella, concretamente en la localidad barcelonesa de Montmaneu. El que fuera otrora brazo ejecutor fue trasladado a Lérida, donde fue ejecutado (16 de enero). Conforme al informe que envió la Junta Superior de Cataluña a la Junta de Defensa de Lérida, el verdugo fue considerado «el más criminal entre todos». Asimismo, se expulsaron de la ciudad «algunos sujetos cuyo patriotismo menos ilustrado que lo que se debía desear, y más exaltado que lo que es justo, podía producir quizás iguales funestas consecuencias en cualquier desgracia que pudiese sufrir nuestro ejército»; o sea, la represión se hizo extensiva a quienes habían

47. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Caja 4, Tarragona, 18 de enero de 1809.

48. Según Antoni de Bofarull (1886: 280): «El tiranuelo de Lérida [Gómez] ni era de nuestra raza ni de nuestro país, era un militar y perteneciente a un cuerpo aristocrático, razón más para creer que, al acaudillar la plebe, no podía hacerlo sino con malvada intención [...] calcúlese que la situación en que pusiera a Lérida el capitán Gómez favoreciera por completo a los enemigos que pretendían entonces ocuparla, para tener un punto de apoyo o enlace entre Cataluña y Aragón, cuya capital, sitiada, se veía entonces rodeada de peligros». Bofarull no entendió que un individuo perteneciente a los estamentos privilegiados encabezara una revuelta destinada a invertir radicalmente la organización social, económica y política. Simplemente, «en los momentos en que hierve la sangre, respirando venganza» contra los supuestos traidores dispuso una conspiración, precisamente, para facilitar la entrega de Lérida a las tropas napoleónicas. Cavilación francamente discutible, más cuando habíamos comprobado la divergente posición social entre los inductores y los ejecutores de los tumultos de 1808.

colaborado con los cabecillas y, en previsión de nuevas derrotas militares, pasaron a ser los principales sospechosos de avivar e incluso encabezar una nueva revuelta popular. El amor a la Patria fue el argumento más poderoso para desacreditar al adversario a la vez que se convirtió en el instrumento más eficaz para justificar o legitimar cualquier actuación. Además de su pronunciado antipatriotismo, según informó la Junta de Lérida a la Superior, el móvil de estos asesinatos, dentro del marco de una «conspiración, sedición y motín», fue la venganza y el robo: «Los Bárbaros monstruos para dichos y otros excesos que tenían premeditados tomaron el vano pretexto que los prisioneros franceses que se habían conducido en esta ciudad debían apoderarse de sus fortalezas y que todos los citados difuntos, como y otros varios consentían a ello y eran traydores a la Patria, quando su verdadero objeto no era otro que la venganza y el robo».⁴⁹ La descalificación de los amotinados, tachados de vulgares ladrones que aprovecharon las propicias circunstancias para resarcir de manera salvaje un agravio personal, pretende desacreditar y desvirtuar la rebelión refutando por completo su carácter subversivo, ya que, como hemos comprobado, propuso transformar el orden socioeconómico vigente.

Prosiguiendo con el relato oficial, disponemos de la versión de los hechos que emitió el gobernador y vicepresidente de la Junta de Gobierno y Defensa leridana, José Casimiro de Lavalle: «El populacho reunido con muchos migueletes y enseñoreando en breves instantes de todas las fortalezas, se apoderó de las Armas, y gritando ferozmente mueran los traidores, asaltó y forzó con bárbara violencia los cuartos de los dichos tres presos [solamente hace mención al oidor de la Audiencia de Barcelona y a los dos abogados de Balaguer] dando allí mismo cruelmente a los dos primeros, y en el día siguiente al tercero; sin que hubiese poder, medio ni autoridad alguna contra la furia de los innumerables amotinados que no respiran sino furor y sangre [ni su presencia ni la del señor obispo los acallaron]». Lavalle, tal y como era costumbre entre los dirigentes absolutistas, menospreció a buena parte de los leridanos calificándolos de «populacho», término despectivo utilizado con el fin de subrayar su radical fanatismo fruto de su profunda inopia, lo que denotaba el pánico que experimentaron las autoridades ante los *sans-culottes*, aquellas masas populares que consideraban proclives a propagar la anarquía (Soboul, A. 1981: 79). Pero en Lérida los que poco o nada tenían que perder intentaron subvertir la jerarquía social y se erigieron en protagonistas de la revuelta popular frente a los notables. Por el contrario, el gobernador aportó un dato esencial: la firme adhesión de los migueletes a la sedición, más si cabe cuando conocemos que, a partir de diciembre de 1808, se tuvieron que incorporar los tercios de migueletes a los regimientos del ejército. El rechazo al sistema de quintas intensificó la fractura social. Nuevamente surge la idea de un patriotismo dual o interesado, tan real como práctico, no exento de cobardía, desmoralización y abatimiento. Por último, según se desprende del *informe* del vicepresidente Lavalle, el *statu quo* se pudo restituir el 18 de enero

49. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Caja 4, *Informe de la Junta de Lérida a la Suprema del Principado*, Lérida, 8 de enero de 1809.

de 1809, eso sí, después de haber ejecutado una contundente represión: «En el día se puede asegurar a V.E. que se halla ya restablecido el orden, y asegurado por la presente pública tranquilidad, con el castigo de algunos reos, y la prisión de otros, y que la justicia exerce sin obstáculos su autoridad y continua con vigilancia la indagación de los factores de tan atroces delitos».⁵⁰

La dimensión del motín del Femeret superó la esfera provincial. La Junta Superior de Cataluña informó de los hechos a la Junta Central en oficio de 19 de febrero de 1809.⁵¹ La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino ratificó las resoluciones aprobadas por la Junta Superior del Principado y por el capitán general. Al mismo tiempo, hizo llegar unas directrices para reafirmar la potestad de los gobernantes, asegurar el acatamiento de las leyes, conservar el orden social mediante la creación de unas rondas armadas integradas por la oligarquía —los ricos en armas— e impartir justicia, o sea, castigar con dureza y ejemplaridad a los culpables de la sedición:

Un atentado tan horroroso ha llenado de indignación a S.M. [Junta Central] que no puede ver sin dolor que el malvado atropelle la seguridad del ciudadano, y que en el reynado del orden y de la justicia sufran las leyes, la razón ni la autoridad pública y el horror nacional una ofensa tan atroz y escandalosa; y aunque se sabe que esa Junta Superior ha tomado las disposiciones convenientes para contener tamaños excesos, con todo la sangre del ciudadano y del que estaba baxo la salvaguarda de V.E., la de la Suprema Junta, la de las leyes y la de todos los tribunales, quiere S.M. que se castigue tan atroz delito con toda la severidad [...], que se arme a nobles, pudientes, hacendados y personas de probidad las quales compongan la fuerza armada que se ha de hacer respetar la autoridad pública, defenderla y auxiliarla para el castigo de los delinquentes [...], que se nombre una comisión principal de investigación [...], que sean arrestados los culpables y se reciba militarmente una información sumaria.⁵²

La virulencia del motín del Femeret instó a la Junta Central a renovar por decreto la Real pragmática de 17 de abril de 1774 introduciendo veinte artículos adicionales relativos al orden público que imponían severas penas a los inductores de las conmociones populares.

Asimismo, el motín del Femeret tuvo una repercusión más cercana. Fraga, localidad situada a unos treinta kilómetros, de nuevo experimentó «la conmoción y alboroto» de meses anteriores con motivo de las falsas noticias que anunciaban la rendición de Zaragoza y el continuo revuelo vivido en la ciudad de Lérida. De hecho, al corregidor Fernández le constaba de forma confidencial que se estaba preparando una «revolución», cuyo objeto era saquear a los poderosos y «atropellar la justicia» —a él. El 4 de enero de 1809 presidió una sesión extraordinaria del Ayuntamiento con el propósito de nombrar a cuatro alcaldes de barrio para

50. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Caja 4, *Informe del vicepresidente de la Junta de Lérida a la Suprema del Principado*, Lérida, 18 de enero de 1809.

51. *Ibid.*, Actas Junta Superior de Cataluña, sesión 11 de mayo de 1809, vol. 2, fol. 35.

52. *Ibid.*, *Oficio de la Junta Central*, vol. 7, fols. 105-106v, 7 de abril de 1809.

vigilar día y noche, de ronda, y reprimir cualquier intento de alterar la tranquilidad pública. De manera unánime, los regidores acordaron establecer una guardia, compuesta de los vecinos más honrados, o sea, los «que tuvieran bienes que perder» en caso de iniciarse una revolución. José Satorres Jover, Manuel Bollich, Felipe Vilar y Joaquín Cabrera Mañes, como individuos de capacidad, responsabilidad y fidelidad probada, serían los alcaldes de barrio encargados de organizar las rondas. Los regidores ponían los medios para su seguridad y la de quienes como ellos tenían, en efecto, mucho que perder.⁵³

De manera fehaciente, la insurrección leridana, unida a otros movimientos populares acaecidos durante los primeros meses del levantamiento, bajo el manto patriótico, evidenció la oposición popular al régimen gubernativo de las viejas y no tan nuevas autoridades. La Junta Superior de Cataluña desoyó el sentir de los más necesitados, aquellos que contribuían a la guerra con hombres y víveres; únicamente estuvo interesada en restituir la quietud, hacer cumplir la legislación vigente, preservar la titularidad de los bienes y proteger la integridad de los vecinos más acomodados:

Si la organización de una fuerza que defienda esta Provincia fue el principal objeto de la instalación de esta Junta Superior, no empleó menos sus desvelos desde sus primeros días en dictar providencias más activas para que se restableciese el orden, se obedecieran las leyes, se respetasen los magistrados y se guardasen los sagrados derechos de la propiedad y seguridad personal. Sus pueblos habían expresado con tanta vehemencia su patriotismo, que aquella parte menos ilustrada y que obra más por el impulso que por la reflexión se había excedido movida de su zelo equivocado a cometer delitos, pensando que hacía grandes servicios a la Patria. Por desgracia los Regentes del Gobierno los irritaron con su temeraria oposición y excitaron ellos mismos unos atentados que hubieran podido evitar si se hubiera conducido con aquella prudencia que exigen las circunstancias.⁵⁴

Del mismo modo, con la firme voluntad de sofocar la revolución y apaciguar la ira popular, la Junta Superior del Principado erigió un tribunal en cada corregimiento y redobló la vigilancia, especialmente en los enclaves susceptibles de contumacia:

La justicia y la quietud pública debían también ocupar los cuidados de la Junta. Para la administración de aquella publicó un arreglo a los 22 de junio y creó después un tribunal en cada corregimiento, compuesto de un Presidente con voto, quatro jueces y un fiscal, para que sin perjuicio de la jurisdicción ordinaria juzgase militarmente de todos los delitos y ejecutase sus sentencias sin necesidad de consultar. Los primeros movimientos de esta Provincia hacia la revolución, aunque originados del más puro patriotismo, pudieron ser acompañados de algunos excesos para contenerlos, hallándose la Audiencia dentro de la capital y cortada toda comunicación con ella, fueron creados estos tribunales criminales. A la quietud

53. Fraga, Archivo Municipal de Fraga (AMF), Caja 137-1 AA, 4 de enero de 1809. Citado por Berenguer Galindo (2012: 24-25).

54. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, vol. 16, fols. 133r-134.

pública proveyó la Junta mandando que cada corregimiento se formase una Esquadra de quince hombres de a caballo y un oficial y un sargento, que recorriesen los pueblos de su distrito con preferencia aquellos en que hubiesen experimentado, o amenazado disturbios y desórdenes.⁵⁵

Las consecuencias del motín: la formación de una nueva junta patriótica

La genuina y legítima Junta de Gobierno y Defensa, reunida en el domicilio particular del gobernador militar, una vez represaliados los principales cabecillas de la rebelión, consideró que, para ejercer su ardua labor con plenas garantías, debía contar con la ineludible confianza de la población, razón por la cual requirió la instauración de una nueva Junta. Desde el mismísimo balcón de la residencia de José Casimiro Lavalle, el obispo Jerónimo María de Torres propuso los nombres de los individuos que entendió más convenientes. Por primera vez el pueblo tuvo la capacidad de decidir, mediante una sonora y efusiva aclamación o recusación. Así pues, los nuevos vocales fueron proclamados por voluntad popular. Los leridanos seleccionaron a sus representantes políticos por afinidad y conveniencia, con conocimiento de causa, mediante un público, espontáneo y colectivo sufragio universal masculino. Torres tuteló la *soberanía popular*. En el contexto de un patriotismo estrechamente unido a la religión católica, las capas populares de la ciudad confiaron en su ilustrísima. De hecho, la historia le avalaba: el prelado había demostrado su patriotismo poniéndose al frente de la Junta de Defensa de Lérida y de la Junta Superior de Cataluña. La nueva Junta de Gobierno estuvo integrada por veintiocho miembros. Como era previsible, el obispo continuó presidiéndola, mientras que la vicepresidencia recayó de nuevo en José Casimiro Lavalle. Por lo tanto, las máximas autoridades continuaron aferradas al poder, pero en estos momentos con el explícito beneplácito del pueblo. Los leridanos no fueron tan indulgentes con los antiguos gobernantes de la Paeria, ya que únicamente eligieron al regidor José Antonio Bufalà, ciudadano honrado de Barcelona, hacendado. La drástica rebaja numérica revela una desaprobación popular de la gestión consistorial. El pueblo se manifestó en contra de los individuos que habían ocupado cargos vitalicios. Los eclesiásticos, en cambio, aumentaron en número hasta alcanzar la cifra de ocho, lo que evidenciaba el prestigio que atesoraban, en buena medida, por el destacado papel ejercido, tanto movilizador como dirigente, durante el alzamiento antinapoleónico. Al ya mencionado obispo, cabe adicionarse el vicario general, Manuel Villar; tres canónigos: Manuel Norzegaray, José Vidal y José Sarri; un presbítero y beneficiado de la parroquia de San Juan, Francisco Gros; el prior de los dominicos; y, por último, un franciscano —Aragónés—, en reconocimiento al fervor patriótico de los frailes. En relación con las élites, completaron la Junta un general del ejército español, Jaime García Conde, el mismo que poco después —mayo de 1810— entregaría Lérida a las tropas de Louis-Gabriel Suchet (Sánchez Carcelén, 2013a: 99-116); un caballero, Antonio de Foxà; el administrador de rentas del ejér-

55. Barcelona, BC, Folletos Bonsoms, n.º 1481, fols. 9-10.

cito, Agustín Pleyan; un doctor en medicina, Juan Bergés; y cinco juristas: el notario Manuel Fuster y Vaquer, que prosiguió en su cargo de secretario; el también notario Francisco Javier Soldevila; y los abogados Pedro Jordà —hacendado—, Fermín Gigó —doctor en leyes— y Anastasio Pinós —historiador (Pinos, 1814). Asimismo, también hallamos individuos procedentes de sectores más populares, como por ejemplo tres labradores: Miguel Oliet, Jaime Lamarca y José Sales; un confitero, Manuel Fàbregues; un comerciante de tejidos, Juan Mensa; y, finalmente, un alpargatero, Antonio Bordalba. Por último, debemos apuntar que Buenaventura Viala representó a la villa de Tárrega, perteneciente a la comarca de Urgel, y Antonio Abril, a Balaguer (La Noguera), para así poder erigir una junta que actuara en calidad de corregimental.⁵⁶

Sin duda, el motín del Femeret provocó una profunda remodelación de la Junta leridana. Por disposición popular accedieron al poder, ahora sí, auténticos liberales, si se sigue su trayectoria política posterior (Casals, 2002: 158; Sánchez Carcelén, 2006a; 2006b: 39-64; 2006c: 277-300; 2007b: 195-219; 2009a; 2013b: 125-144): Manuel Fuster fue regidor de los primeros ayuntamientos constitucionales (1820-1821) y formó parte de la milicia nacional, méritos suficientes para ser acreedor de la represión fernandina durante la Década Ominosa (Sánchez Carcelén, 2009b: 116-140); la misma que experimentó Francisco Javier Soldevila, primer alcalde del consistorio liberal *exaltado* de 1823. Además, contamos con Pedro Jordà, síndico personero en 1792, diputado del común en 1798-1799, 1803-1804 y 1818-1819 y síndico del Ayuntamiento constitucional de 1823; Jaime Lamarca, diputado del común en 1816-1817 y 1819-1820 y regidor durante el consistorio liberal de 1823; Agustín Pleyan, regidor de los ayuntamientos constitucionales de 1821-1822; Juan Bergés, miliciano voluntario desde 1820; Anastasio Pinós, síndico procurador de 1791 a 1793; Miguel Oliet, diputado del común en 1808; José Sales, contador del ejército durante el Trienio Liberal; Manuel Fàbregues, comisionado del crédito público durante el gobierno constitucional, considerado «adicto al sistema liberal»; y Juan Mensa, diputado del común en 1815-1816. Así pues, a la lucha napoleónica se añadió la socioeconómica —el pueblo frente a los *honrados* vecinos acaudalados— y, finalmente, la político-ideológica, ya que el motín del Femeret abrió la puerta del poder local a sectores sociales que con el absolutismo no tenían posibilidades de acceder a los principales cargos de la Paeria. Podríamos decir que la guerra de la Independencia permitió la primera experiencia pseudoliberal. Asimismo, no debemos desdeñar la presencia de ilustres absolutistas en la Junta: el obispo Torres (Sánchez Carcelén, 2012); José Vidal, represaliado por el gobierno constitucional (Sánchez Carcelén, 2005: 351-372); José Casimiro Lavalle, José Antonio Bufalà, regidor vitalicio de 1814 a 1820 (Sánchez Carcelén, 2014: 1-27); o Fermín Gigó, que, a pesar de que fue alcalde primero del tercer consistorio constitucional (1822) y capitán de la milicia nacional, al inicio de la Década Ominosa fue nombrado alcalde mayor y teniente corregidor, y a partir de 1827 ejerció de regidor vitalicio. Por lo tanto, la tradicional y conservadora élite dominante preservó una destacada representación en una Junta

56. Barcelona, ACA, Guerra de la Independencia, Caja 4, 18 de enero de 1809.

de Gobierno que mantuvo como principales prioridades la defensa de la religión, del «querido y amado» rey Fernando y, como no, de la Patria. Del mismo modo, el gobernador militar envió una misiva al capitán general para denunciar la lentitud con la que procedía el Tribunal de Justicia, según su sentir, porque «tenía miedo de actuar entre los asesinos». Al mismo tiempo, José Casimiro Lavallo manifestó su oposición a los nuevos miembros de la Junta elegidos por aclamación popular: «Aseguro a V.E. [Redding] que lejos de poder contar con su influjo para los importantísimos objetivos [...] experimento la dificultad de guardar el secreto [...], el peligro de herrar en materias ajenas a su profesión, que sólo cesarán reduciendo el número de vocales y haciéndose la elección de estos por una autoridad superior que el pueblo [...], nombrando pocos sujetos, pero de conocido talante, rectitud y patriotismo».⁵⁷ Además de instituir por mandato imperativo una curia de notables, el vicepresidente de la Junta, antiguo «gobernador de lo político y lo militar», se mostró partidario de acelerar la represión, medida en consonancia con la constitución de una fuerza pública de control, formada por nobles, hacendados, personas acomodadas y «honradas» con el objetivo de auxiliar y defender la autoridad pública.

A modo de conclusión

A finales del siglo XVIII se intensificó la crisis de la sociedad del Antiguo Régimen. El fracaso del reformismo ilustrado y los límites del modelo de crecimiento agrícola —aumento de la población, presión sobre la tierra y persistencia del régimen señorial— estimularon la progresiva resistencia a satisfacer los derechos feudales, incrementaron la conflictividad social y no impidieron el estallido de las cíclicas crisis de subsistencias, motines espontáneos, sin programa político definido ni voluntad de alterar el orden social, pero que, dada la perturbación de la seguridad pública y su desmesurada violencia, principalmente, contra los bienes de la oligarquía local, tuvieron que ser disueltos mediante una contundente y ejemplar represión.

Del mismo modo, el liberalismo doctrinario (Santirso, 2014: 81-102) y la experiencia revolucionaria francesa facilitaron modelos teóricos y ejemplos prácticos para sacudir, erosionar e incluso socavar los frágiles pilares del absolutismo tardofeudal. Por el contrario, la *Guerra Gran* sostuvo la monarquía absoluta e intensificó el tradicional control ideológico de los eclesiásticos mediante una aguda campaña propagandística fundamentada en la defensa del Trono y del Altar, o sea, la antirrevolución. Eso sí, en Cataluña no debe obviarse que el conflicto bélico restauró el somatén, instauró los tercios de miqueletes, inició el movimiento juntero, avivó el patriotismo y, por último, hizo ostensible para con el Gobierno la insatisfacción popular generada por las crecientes consecuencias negativas de la contienda, entre las que destaca sobremanera la actitud xenófoba de los catalanes en relación con los residentes franceses.

57. *Ibid.*, Caja 4, Informe del vicepresidente de la Junta de Lérida al Capitán General Redding, Lérida, 29 de enero de 1809.

Tomando la sociedad como tema de estudio, teniendo presente, siempre, que son los hombres y las mujeres los protagonistas de una historia dinámica, podemos comprobar que la estructura socioprofesional de la Lérida de principios del siglo XIX nos permite verificar empíricamente, mediante una cuantificación numérica, la significativa jerarquización social entre unos minoritarios y, en buena medida, improductivos estamentos privilegiados —aristocracia, curia eclesiástica, oficialidad militar e insignes doctores en leyes y en medicina— y el resto, o sea, la inmensa mayoría no privilegiada, que integraba los diferentes sectores productivos, principalmente, agrarios y menestrales. De la misma manera, la heterogénea composición social se veía agravada por la tradicional desigualdad civil y contributiva; por la pérdida de poder adquisitivo de los colectivos más humildes a raíz de la incesante alza de precios; y, especialmente, por el dispar acceso a los recursos —primordialmente a los bienes y rentas rústicas—, a los cargos oficiales y a los contratos públicos.

Así pues, múltiples factores vinculados entre sí —presión demográfica, disímil distribución de la riqueza, extensión de la pobreza material y ardua subsistencia popular, junto, por ejemplo, a exclusivas prerrogativas legislativas, fiscales o políticas— se hallaban a la espera de propicias circunstancias, precisamente aquellas que acaecieron con la irrupción napoleónica —inestabilidad institucional y subsiguiente vacío de poder— para aflorar, eso sí, con carácter de profunda subversión de la situación anterior, en forma de violenta revuelta popular.

Asimismo, una vez ya iniciada la invasión de la *Grande Armée*, las autoridades y los individuos más pudientes estuvieron más preocupados en mantener el orden social vigente que en consignar un auténtico fervor patriótico. Nuevamente, se priorizaron los intereses personales a los colectivos. Por el contrario, las capas sociales más populares, de manera ostensible, abanderaron la resistencia y se opusieron a las tropas francesas, seguramente por la acción y el poder de convicción de las prédicas eclesiásticas. De hecho, como demuestra el caso particular del *Sacramento de los leridanos* y la formación de la Junta de Gobierno de Lérida, por la unión de los conceptos de patria y religión, la insurrección popular inicial fue canalizada por el clero hacia un levantamiento contra los napoleónicos que, de manera indirecta, significó la quiebra de las personas e instituciones representativas del Antiguo Régimen. Precisamente, el hundimiento de la monarquía borbónica otorgó a los sectores populares un inesperado protagonismo histórico que, mediante las diversas formas de movilización social —las juntas y la guerrilla—, les permitió experimentar una nueva organización política y social, ciertamente, más participativa, representativa e igualitaria.

Sin duda, el patriotismo fue el motor del alzamiento antinapoleónico y del movimiento juntero, pero debemos establecer diferentes grados. Uno, el de las élites, más prosaico, interesado en defender la propiedad, conservar la tranquilidad pública y evitar la anarquía; y otro más sentimental o psicológico, a partir de la creencia de pertenecer a una colectividad que comparte una misma identidad cultural, enraizado en las clases populares por el mensaje antifrancés de la Iglesia. De hecho, los aspectos intelectuales y mentales de la sociedad durante el conflicto, o sea, la dimensión cultural de la guerra (Dufour y Larriba, 2009), permiten

abandonar la superficie de lo bélico para comprender las transformaciones sociales y los cambios de comportamiento. Precisamente, al amparo del enérgico adoctrinamiento clerical y bajo un apasionado patriotismo, no dejaron de surgir iniciativas y planteamientos de signo claramente revolucionario, asociadas a un grado importante de movilización popular armada, lo que evidencia un profundo recelo hacia la actuación del poder establecido que derivaría en desacato, tal y como demostraron los violentos sucesos acaecidos en Tortosa, Vilafranca del Penedés, Olot, Manresa, Balaguer, Valencia, Huesca o Fraga. Es ahí donde nace una *guerra popular* de gran complejidad (Fontana, 2013: 9-24; Ramisa, 2013: 89-101) con perfiles de guerra civil (De Diego García, 2008b: 21). El contexto de una revolución político-institucional propició el enfrentamiento entre vecinos notables o pudientes y de estos frente a quienes se mantienen en la raya de la mera subsistencia económica y social. Se recurrió a la venganza personal —asesinatos de cobradores de impuestos, usureros, ricos y autoridades *afrancesadas*— y a la usurpación material —bienes y propiedades— para revertir una situación social interna percibida por algunos como opresiva o abusiva.

Del mismo modo, la historiografía liberal vio en la contienda la lucha del pueblo en defensa de sus libertades. Las numerosas manifestaciones de protesta social, auspiciadas por los profundos desequilibrios sociales, materiales, jurídicos y políticos, avivaron el proceso de reconstrucción institucional. Pero el movimiento juntero, debido al conservadurismo social de las juntas y la obsesión por el mantenimiento del orden, controló el levantamiento popular y negó la isegoría o libertad de expresión y la isonomía o igualdad ante la ley, por ejemplo, mediante las exenciones de las gentes acomodadas de concurrir al reemplazo del ejército. Asimismo, al anhelo de un sistema político más participativo y equitativo, debemos añadir un cúmulo de circunstancias —asfixiante presión fiscal, creciente movilización popular militar, desfavorable evolución de la guerra y desprecio de la autoridad ante su aparente tibieza patriótica— acaecidas a lo largo de los primeros meses de contienda para poder vislumbrar el porqué del estallido del motín del Femeret en enero de 1809, aún más si tenemos presente que los movimientos sociales suelen cobrar fuerza en momentos de crisis o cambio social y político.

El malestar popular fue canalizado por los sectores más radicalizados, aquellos que, portando el estandarte del patriotismo anti francés, por la vía armada derrocaron a la oligarquía leridana para, por primera vez, conferir el poder político a la comunidad; incluso se propuso repartir los bienes materiales de los vecinos más acaudalados entre los insurrectos, o sea, entre las capas más humildes de la sociedad. La rebelión solamente pudo ser reprimida por la contundente intervención del ejército. Los principales cabecillas fueron ajusticiados y ejecutados. Pese a la severa represión, no se pudo erradicar el espíritu renovador y las nuevas autoridades precisaron de la legitimación del pueblo. Los vocales de la nueva Junta fueron escogidos por aclamación popular, hecho que permitió el nacimiento de un espacio público en el que circularon las ideas, en buena medida cercanas a los preceptos liberales, de acuerdo con su posterior adscripción política. Así pues, en definitiva, en el conflicto hallamos el origen de la modernidad, ya que la guerra antinapoleónica tuvo la virtud de remover los cimientos del Antiguo Régimen.

Referencias bibliográficas

- ALBAREDA, J. (2010). *La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)*. Barcelona: Crítica.
- ALBEROLA, A.; LARRIBA, E. (eds.) (2010). *Las élites y la «revolución de España» (1808-1814). Estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante-Université de Provence-Casa de Velázquez.
- ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001). *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*. Madrid: Santillana.
- ANES, G. (1969). *Economía e ilustración en la España del siglo XVIII*. Barcelona: Ariel.
- ARNABAT, R. (ed.) (1997). *Moviments de protesta i resistència a la fi de l'Antic Règim*. Barcelona: Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana – Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- (2008). «La propaganda política en la Guerra». *Història Moderna i Contemporània*, 6, 26-42.
- ARTOLA, M. (1990). *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*. Madrid: Alianza.
- (2008 [1953]). *Los afrancesados*. Madrid: Alianza.
- AYMES J.-R. (1986). *La guerra de la Independencia en España (1808-1814)*. Madrid: Siglo XXI.
- (1989). «La société espagnole (1808-1814): La notion de public». En: Morange, C. *et al. La Revolution française et son «Public» en Espagne entre 1808-1814*. Besançon-París: Les Belles-Lettres, 125-182.
- (1990). «La opinión pública catalana durante la guerra contra la Convención (1793-1795)». En: VV. AA. *El jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya, 1789-1837*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 139-160.
- (1991). *La guerra de España contra la revolución francesa (1793-1795)*. Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert.
- (1994). «Una guerra distinta de las demás». *Studia Historica. Historia Moderna*, 12, 35-53.
- (2005). *Ilustración y Revolución Francesa en España*. Lérida: Milenio.
- (2008). *La Guerra de la Independencia: héroes, villanos y víctimas (1808-1814)*. Lérida: Milenio.
- BARBASTRO GIL, L. (1993). *Los afrancesados: primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820)*. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
- BERENGUER GALINDO, T. (2012). *Fraga en la guerra de la Independencia*. <<http://historiadefraga.es/fraga-en-la-guerra-de-la-independencia/>>. [Consultado el 15-9-2014]
- BOFARULL, A. (1886). *Historia crítica de la Guerra de la Independencia en Cataluña*. Vol. I, Barcelona: F. Naciente.
- BOSCH PORTELL, M. (2009). «Viure i pagar la guerra. Els efectes de la Guerra del Francès en la família i el patrimoni Carles». *Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos*, 40, 57-77.
- BUSTELO, F. (1976). «La población de Cataluña en el siglo XVIII». *Hacienda Pública Española*, 38, 81-91.
- CABANES, F. X. (1809). «Historia de las operaciones del ejército de Cataluña. En la Guerra de la Usurpación, campaña primera». Tarragona: Imprenta de Brusi.
- CAHNER, M. (1998). *Literatura de la revolució i la contrarevolució (1789-1849). De la reacció contra la França revolucionària a la col·laboració amb la Grande Armée*. Barcelona: Curial.
- CANALES, E. (1988). «Patriotismo y deserción durante la Guerra de la Independencia en Cataluña». *Revista Portuguesa de História*, 23, 271-300.

- (1990). «La deserción en España durante la Guerra de la Independencia». En VV. AA. *El jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya, 1789-1837*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 211-230.
- (2001). «Militares y civiles en la conducción de la Guerra de la Independencia: la visión de Francisco Javier Cabanes». En: Armillas, J. A. (coord.). *La Guerra de la Independencia. Estudios*. Zaragoza: Diputación de Zaragoza, 955-987.
- (2002). «El impacto demográfico de la Guerra de la Independencia». En: VV. AA. *Enfrontaments civils: postguerra i reconstruccions*. Vol 1. Lérida: Pagès, 283-299.
- (2003). «Ejército y población civil durante la Guerra de la Independencia: unas relaciones conflictivas». *Hispania Nova*, 3, 10-37.
- (2004). «1808-1814: démographie et guerre en Espagne». *Annales Historiques de la Révolution Française*, 336, 37-54.
- CANTERA MONTENEGRO, J. (2010). «La otra guerra: la lucha por la subsistencia. Acuartelamiento, vestuario y alimentación durante la Guerra de la Independencia». *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos*, ix, 147-165.
- CARDESÍN, J. M. (2008). «Motín y magnicidio en la Guerra de la Independencia: la voz “arrastra” como modelo de violencia colectiva». *Historia Social*, 62, 47-67.
- CARRERA PUJAL, J. (1957). *Historia política de Cataluña. Siglo XIX*. Vol. I. Barcelona: Bosch.
- CASALS BERGÉS, Q. (1999). *Canvi econòmic i social en el pas de l'antic règim a l'estat liberal: Lleida en la primera meitat del segle XIX*. Lleida: Universitat de Lleida.
- (2002). *Polítics de Lleida: el poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868)*. Lleida: Universitat de Lleida.
- (2011). «La formación del personal político liberal en Lérida». *Tiempos Modernos*, 23, 1-31.
- (2016). *La Guerra del Francès a Catalunya: una nòmina del seu poder polític (1808-1814)*. Lleida: IEI.
- CASTELLS, I. (1970). «Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona». *Recerques: Història, Economia, Cultura*, 1, 51-81.
- CAYUELA, J. G.; GALLEGO, J. Á. (2008). *La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y nación en España (1808-1814)*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- CERRO NARGÁNEZ, R. (2001). «Los alcaldes mayores del corregimiento de Lérida en el siglo XVIII». *Cuadernos Dieciochistas*, 2, 37-72.
- (2007). «Servir al rey en Cataluña: los alcaldes mayores del corregimiento de Vilafranca del Penedés (1719-1808)». *Estudis*, 33, 255-283.
- CONGOST, R. (1991). «La “classe” dels hisendats». *Revista de Girona*, 144, 54-61.
- (1997). «De pagesos a hisendats. Reflexions sobre l'anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)». *Recerques: Història, Economia, Cultura*, 35, 51-72.
- COTS I CASTAÑÉ, A. (1983). «Aproximació a l'estudi dels conflictes senyorials a Catalunya (1751-1808)». *Estudis d'Història Agrària*, 6, 241-268.
- CUENCA TORIBIO, J. M. (2006). *La Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo*. Madrid: Encuentro.
- DE DIEGO GARCÍA, E. (2007). «La Guerra de la Independencia: la propaganda como motor de la resistencia». En: Moliner, A. (coord.). *Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814)*. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya, 131-161.
- (2008a). «La verdad construida: la propaganda en la guerra de la Independencia». En: Moliner, A. (coord.). *La guerra de la Independencia en España (1808-1814)*. Madrid: Nabla, 209-254.
- (2008b). *España, el infierno de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la guerra de la Independencia*. Madrid: Esfera de los Libros.

- DELGADO, S. (ed.) (1979). *Guerra de la Independencia. Proclamas, bandos y combates*. Madrid: Editora Nacional.
- DESDEVISES DU DÉZERT, G.-N. (1910). «La Junte Supérieure de Catalogne». *Revue Hispanique*, XXII.
- DOMERGUE, L. (1989). «Propaganda y contrapropaganda en España durante la Revolución Francesa (1789-1795)». En: Aymes, J.-R. (ed.). *España y la Revolución Francesa*. Barcelona: Crítica, 118-167.
- DUFOUR, G.; LARRIBA, E. (dirs.) (2009). *L'Espagne en 1808. Régénération ou révolution?* Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
- DUVERGER, M. (1980). *Instituciones políticas y Derecho Constitucional*. Barcelona: Ariel.
- ESDAILE, C. (2004). *La Guerra de la Independencia. Una nueva historia*. Barcelona: Crítica.
- FÀBREGAS ROIG, J. (2000a). *La Guerra Gran, 1793-1795: el protagonisme de Girona i la mobilització dels Miquelets*. Lleida: Pagès.
- (2000b). *Catalunya i la Guerra Gran: l'aportació dels corregiments meridionals*. Tarragona: Diputació de Tarragona.
- (1996). *La España de los Borbones: las reformas del siglo XVIII*. Madrid: Temas de Hoy.
- FONTANA, J. (1978). «La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España». *Hacienda Pública Española*, 55, 177-190.
- (1981a). «La financiación de la guerra de la Independencia». *Hacienda Pública Española*, 69, 209-217.
- (1981b). «Qui va pagar la guerra del francès?». En: Fontana, J. (ed.). *La invasió napoleònica. Economia, cultura i societat*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 7-20.
- (1983). *La crisis del Antiguo Régimen*. Barcelona, Crítica.
- (1997). «Los campesinos en la historia: reflexiones sobre un concepto y unos prejuicios». *Historia Social*, 28, 3-11.
- (2013). «Les guerres del francès». En: Arnabat, R. (ed.). *La guerra del Francès 200 anys després*. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 9-24.
- FONTANA, J.; GARRABOU, R. (1986). *Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814)*. Alicante: Instituto Juan Gil-Albert.
- FRASER, R. (2006). *La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia. 1808-1814*. Barcelona: Crítica.
- FUENTES, J. F. (1988). «Concepto de pueblo en el primer liberalismo español». *Trienio. Ilustración y Liberalismo*, 12, 176-209.
- (1992). «Pueblo y élites en la España contemporánea, 1808-1939 (reflexiones sobre un desencuentro)». *Historia Contemporánea*, 8, 15-34.
- (2007). «Afrancesados y liberales». En: Canal, J. (coord.). *Exilios: los éxodos políticos en la historia de España: siglos XV-XX*. Madrid: Sílex, 137-166.
- (2008). «Los afrancesados». En: VV. AA. *Madrid 1808. Ciudad y protagonistas*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 119-136.
- (2009). «Pueblo». En: Fernández Sebastián, J. (dir.). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*. Vol. I. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1.190-1.201.
- (2010). «Pueblo y élites en la España contemporánea, 1808-1939. Reflexiones sobre un desencuentro». *Historia Contemporánea*, 8, 15-34.
- GARCÍA CÁRCCEL, R. (2007). *El sueño de la nación indomable*. Madrid: Temas de Hoy.
- GAY, P. (1995). *La edad de las luces*. Barcelona: Folio. 2 vols.
- GAY ESCODA, J. M. (1997). *El corregidor a Catalunya*. Madrid: Marcial Pons.

- GRAS ESTEVE, R. (1899). *Lérida y la Guerra de la Independencia*. Lleida: Imprenta y Librería de Sol y Benet.
- GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. (1980). *Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III*. Madrid: IEAL.
- HAUPT, G. (1986). *El historiador y el movimiento social*. Madrid: Siglo XXI.
- HERRERO, J. (1973). *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*. Madrid: Edicusa.
- HOBBSAWM, E. J. (1991). «De la historia social a la historia de la sociedad». *Historia Social*, 10, 5-26.
- HOCQUELLET, R. (2008). *Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- HUGUET, R. (1990). *Els artesans de Lleida: 1680-1808*. Lleida: Pagès.
- IGLESIAS, J. (1969-1970). *El cens del comte de Floridablanca. 1787 (Part de Catalunya)*. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana.
- JARDIN, A. (1989). *Historia del liberalismo político. De la crisis del absolutismo a la Constitución de 1875*. México: Fondo de Cultura Económica.
- JURETSCHKE, H. (1986 [1962]). *Los afrancesados en la Guerra de la Independencia. Su génesis, desarrollo y consecuencias históricas*. Madrid: Sarpe.
- LA PARRA, E. (1994). «La inestabilidad de la monarquía de Carlos IV». *Studia Histórica. Historia Moderna*, 12, 23-34.
- (2007). «El mito del rey deseado». En: Demange, C. et al. (coord.). *Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1814)*. Madrid: Casa de Velázquez, 221-236.
- (2008). «El clero durante la Guerra de la Independencia». En: VV. AA. *España 1808-1814. La Nación en armas*. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 273-284.
- (2009). «El rey imaginario». En: De Diego, E. (dir.). *El comienzo de la Guerra de la Independencia. Congreso Internacional del Bicentenario*. Madrid: Actas, 199-209.
- (ed.) (2010). *La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, consecuencias*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante – Casa de Velázquez.
- LAFOZ RABAZA, H. (1996). *La Guerra de la Independencia en Aragón. Del motín de Aranjuez a la capitulación de Zaragoza (marzo de 1808-febrero de 1809)*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
- LARRIBA, E. (2008). «La contribución de la *Gaceta de Madrid* al desprestigio de Carlos IV y del Antiguo Régimen por la exaltación de Napoleón (1804-1808)». *Cuadernos de Historia Moderna*, 7, 239-276.
- LLADONOSA, J. (1973). *Història de Lleida*. Vol. II. Tàrraga: Francesc Camps Calmet.
- LÓPEZ TABAR, J. (2001). *Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- MARTÍNEZ ALBIACH, A. (1969). *Religiosidad hispánica y sociedad borbónica*. Burgos: Publicaciones de la Facultad Teológica del Norte de España.
- MOLAS RIBALTA, P. (1980). «Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón». En: Molas Ribalta, P.; Pérez Samper, M. Á. *Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*. Barcelona: CSIC, Institución Milà y Fontanals, 117-164.
- MOLINER, A. (1982). «Movimientos populares en Cataluña durante la Guerra de la Independencia». *Estudios de Historia Social*, 22-23, 23-40.
- (1983). «Los problemas de la Hacienda en Cataluña durante la Guerra de la Independencia». *Anales de la Universidad de Alicante*, 2, 35-67.

- (1984). «Las Juntas corregimentales de Cataluña en la Guerra del Francés». *Hispania*, LXIV/158, 549-582.
- (1987). «La peculiaridad de la revolución española de 1808». *Hispania*, LXIV/166, 629-678.
- (1989). *La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812)*. Barcelona: Edicions 62.
- (1997). *Revolución burguesa y movimiento juntero en España (la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868)*. Lérida: Milenio.
- (2001). «Pueblo y Ejército en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Actitudes y comportamientos». *Trienio: Ilustración y Liberalismo*, 38, 39-74.
- (2006). «Las juntas como respuesta a la invasión francesa». *Revista de Historia Militar*, 1, 37-70.
- (2007a). «El movimiento juntero en la España de 1808». En: Manuel Chust Calero (coord.). *1808: la eclosión juntera en el mundo hispano*. México: Fondo de Cultura Económica – El Colegio de México, 51-83.
- (coord.) (2007b). *La Guerra de la Independencia en España (1808-1814)*. Barcelona: Nablá.
- (2007c). *Catalunya contra Napoleó. La Guerra del Francès (1808-1814)*. Lérida: Pagès.
- (2008). «La España josefina: los afrancesados». *Revista de Historia Militar*, Extra 1, 27-64.
- (2010a). «La ocupación de Cataluña y la resistencia en la Guerra del Francés». En: Borreguero, C. (coord.). *La Guerra de la Independencia en el mosaico peninsular (1808-1814)*. Burgos: Universidad de Burgos, 171-198.
- (2010b). «La propaganda antifrancesa de la Guerra Peninsular». En: Viguera Ruiz, R. (coord.). *Dos siglos de historia: actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la Independencia (1808-1814)*. Logroño: Universidad de La Rioja, 133-162.
- (ed.) (2010c). *La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
- MORANGE, C. (2005). «¿Afrancesados o josefinos?». *Spagna Contemporanea*, 27, 27-54.
- MORENO ALONSO, M. (2008). «Los hombres del intruso». En: Miranda Rubio, F. (coord.). *Guerra, sociedad y política (1808-1814)*. Vol. I. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 485-506.
- MOREU-REY, E. (1967). *Revolució a Barcelona el 1789*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
- MUÑOZ DUEÑAS, M. D. (1994). «Las resistencias al diezmo». *Hacienda Pública Española*, 1, 155-165.
- NADAL, J. (1976). *La población española (siglos XVI-XX)*. Barcelona: Ariel.
- (1990). «Las grandes crisis de mortalidad de los años 1793-1812: los efectos a largo plazo en la población catalana». *Boletín de la Asociación de Demografía Histórica*, VIII, 2, 37-49.
- ORTONEDA I MAYORAL, E. (1999). «Metges i cirurgians més rellevants a Lleida en els segles XVIII i XIX». *Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència*, 31, 41-48.
- OSSORIO Y GALLARDO, A. (1977). *Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con la República francesa, 1793-1795*. Barcelona: Grijalbo. [Monografía original, Madrid: Oliva Impresor, 1913].
- PÉREZ GARZÓN, J. S. (2007). *Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814)*. Madrid: Síntesis.

- PÉREZ MOREDA, V. (1980). *Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XIX*. Madrid: Siglo XXI.
- PINOS, A. (1814). *Sitio y toma de Lérida por los franceses en 1810*. Lérida: Depósito Antiguo del Hospital de Santa María, Instituto de Estudios Ilerdenses.
- PIQUERAS, J. A. (2014). *Federalismo. La libertad protegida, la convivencia pactada*. Madrid: Cátedra.
- PLA, L.; SERRANO, À. (1995). *La societat de Lleida al set-cents*. Lérida: Pagès.
- PRO RUIZ, J. «Afrancesados: sobre la nacionalidad de las culturas políticas». En: Pérez Ledesma, M. y Sierra, M. (2010). *Culturas políticas: teoría e historia*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 205-232.
- Q. G. (Pere Alegret) (1887). *Apuntes históricos de Vilafranca del Panadés y su comarca*. Vilafranca del Penedès: Librería de Pedro Alegret y Vilaró.
- RAMISA, M. (1995). *Els catalans i el domini napoleònic*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- (2008a). «Les elits catalanes durant la Guerra del Francès». *Història Moderna i Contemporània*, 6, 5-25.
- (2008b). *Polítics i militars a la guerra del Francès, 1808-1814*. Lérida: Institut d'Estudis Ilerdencs.
- (2013). «Comportaments socials davant la guerra del Francès». En: Arnabat, R. (ed.). *La guerra del Francès 200 anys després*. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 89-101.
- RECASENS, J. M. (1965). *La revolución y Guerra de la Independencia en la ciudad de Tarragona*. Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense.
- RIERA, E. (1994). *Els afrancesats a Catalunya*. Barcelona: Curial.
- RODRÍGUEZ CASADO, V. (1962). *La política y los políticos en el reinado de Carlos III*. Madrid: Rialp.
- ROURA I AULINAS, L. (1993). *Guerra gran a la ratlla de França: Catalunya dins la guerra contra la Revolució Francesa: 1793-1795*. Barcelona: Curial.
- (2008). «Guerra de Independencia e inicios de Revolución». *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos*, 7, 73-90.
- RUBÍ I CASALS, M. G. (coord.) (2009). *De la revolta a la destrucció: Manresa i la Catalunya central a la Guerra del Francès*. Manresa: Centre d'Estudis del Bages – Ajuntament de Manresa.
- RÚJULA, P. (ed.) (2014). *Ayer*, 95. *Los afrancesados*, 13-153.
- RÚJULA, P.; CANAL, J. (eds.) (2012). *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*. Madrid: Marcial Pons.
- SALES, N. (1974). *Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos*. Barcelona: Ariel.
- SÁNCHEZ CARCELÉN, A. (2005). «La repressió dels eclesiàstics absolutistes lleidatans al Trienni Liberal. El cas del bisbe Renteria». *Història Moderna i Contemporània*, 3, 351-372.
- (2006a). *La revolució liberal a Lleida (1820-1823)*. Lérida: Universitat de Lleida.
- (2006b). «La resistència liberal de Lleida davant la invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís». *Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics*, 17, 39-64.
- (2006c). «Els polítics de Lleida al Trienni Liberal (1820-1823)». *Història Moderna i Contemporània*, 4, 277-300.
- (2007a). «Propaganda i resistència a Lleida durant la Guerra del Francès (1808-1814)». En: Moliner, A. (coord.). *Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814)*. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya, 279-290.
- (2007b). «La Milícia Nacional de Lleida al Trienni Liberal». *Història Moderna i Contemporània*, 5, 195-219.

- (2008). «La sociedad de Lleida durante el reinado de Carlos IV». *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, 18, 211-226.
- (2009a). *Els defensors de Ferran VII a Lleida (1823-1833)*. Lérida: Universitat de Lleida.
- (2009b). «Ferran VII el cruel: la repressió dels liberals a la Lleida de la Dècada Ominosa». *Història Moderna i Contemporània*, 7, 116-140.
- (2010). «Eclesiàsticos catalanes y las Cortes de Cádiz». *Anuario de Historia de la Iglesia*, 19, 133-139.
- *Absolutisme i liberalisme: l'Església de Lleida durant el regnat de Ferran VII (1808-1833)*. Barcelona: Ajuntament de la Pobla de Claramunt, 2012.
- (2013). «Lérida (1810). El dominio de la línea del Segre». En: Butrón Prida, G.; Rújula, P. (eds.). *Los sitios en la Guerra de la Independencia: la lucha en las ciudades*. Madrid: Sílex, 99-116.
- (2013b). «La Constitució de Cadis a la Lleida del Trienni Liberal». *Rubrica Contemporània*, vol. 2, 3, 125-144.
- (2014). «El retorno al absolutismo. La restauración absolutista de Fernando VII en Lérida (1814-1820)». *Tiempos Modernos*, 28, 1-27.
- SANTIRSO, M. (2014). *El liberalismo. Una herencia disputada*. Madrid: Cátedra.
- SARRET Y ARBÓS, J. (1922). *Manresa en la Guerra de la Independencia (1808-1814)*. Manresa: Ayuntamiento de Manresa.
- SOBOUL, A. (1981). *La Revolución Francesa*. Barcelona: Orbis.
- TASIS, R. (1962). *La Revolució Francesa i Catalunya*. Barcelona: Rafael Dalmau.
- TARRAGÓ PLEYÁN, J. A. (1947). «La sublevación de unos exaltados en Lérida o el motín del "Femeret" en el mes de enero de 1809». En: VV. AA. *Aportación al estudio de la Guerra de Independencia en Lérida*. Lérida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 67-71.
- TELLO, E. (1997). «La conflictividad social en el mundo rural catalán, del Antiguo Régimen a la Revolución liberal, 1720-1833». *Noticiario de Historia Agraria. Boletín Informativo del Seminario de Historia Agraria*, 13, 89-104.
- TORJA ISASA, E. (2009). «La alimentación en la época de la Guerra de la Independencia». *Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*, vol. 75, 5, 613-638.
- TORRAS I RIBÉ, J. M. (1983). *Els municipis catalans de l'Antic Règim (1453-1808): procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants*. Barcelona: Curial.
- TORRES, J. M. et al. (1812). *Instrucción de los ilustrísimos señores obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona al clero y pueblo de sus diócesis*. Palma de Mallorca: Imprenta de Felipe Guasp.
- VICEDO I RIUS, E. (1982). «Propietat, accés a la terra i distribució dels ingressos a la Lleida del segle XVIII». *Recerques: Història, Economia, Cultura*, 12, 57-90.
- (1983). «Els preus dels cereals al mercat de Lleida durant la primera meitat del segle XIX». *Recerques: Història, Economia, Cultura*, 14, 167-176.
- (1991). *Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producció, propietat i renda*. Barcelona: Crítica.
- (1993a). «La conflictividad en las Tierras de Lleida en el siglo XVIII: la respuesta campesina a la detracción señorial y la lucha por el acceso a los recursos». *Áreas. Revista de Ciencias Sociales*, 15, 99-112.
- (1993b). «Producció, intercanvis i transformacions socials a les terres de Lleida (segles XVIII-XIX)». En: Bretón, V.; López Palomeque, F. *La regió agrària de Lleida: Jornades d'Estudis Agraris*. Lleida: Pagès, 39-70.
- (1999). «Crisis de las solidaridades tradicionales y nuevas formas de asociación y resistencia campesina en la Cataluña Occidental (1750-1920)». *Historia Agraria*, 2, 201-223.

- (2002). «Estacionalidad y productividad del trabajo en un marco tecnológico tradicional: Cataluña Occidental, 1750-1890». *Historia Agraria*, 27, 101-131.
- (2007). «Les transformacions del món rural de les terres de Lleida: els límits d'un creixement. Segle XVIII». *Estudis d'Història Agrària*, 20, 69-88.
- (2008). «Mercado y precios. El Almudí de Lérida, 1700-1833». *Historia Agraria*, 45, 41-79.
- VICENS VIVES, J. (1962). *Moments crucials de la història de Catalunya*. Barcelona: Vicens Vives.
- VIDAL, X. (1996). «La privatització del patrimoni rústic municipal lleidatà al segle XVIII. Un assaig de perfil sociològic». En: Busqueta, J.; Vicedo, E. (coords.). *Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa contemporània*. Lérida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 237-264.
- VILAR, P. (1982). *Hidalgos, amotinados y guerrilleros*. Barcelona: Crítica.

